

Diciembre 11 de 1953

50ª REUNION — 5ª SESION EXTRAORDINARIA

Presidencia del contraalmirante (R.) ALBERTO TEISAIRE,
presidente provisional del Honorable Senado

Secretarios: señores ALBERTO H. REALES y SANTIAGO A. JOB

SENADORES PRESENTES:

ALBARINO, Ramón A.
AMADO, Elías Teodoro F.
ANGULO, Rodolfo Antonio
ANTINUCOLI, Atilio
BAZAN, Miguel Angel
BRISOLI, Blas
CALVINO DE GÓMEZ, María Rosa
CASCO DE AGÜER, María del Carmen
CASTAÑEIRA DE BACCARO, Hilda Nélida
CORREA, Antonio Eduardo
CORRECHE, Susana
DE PAOLIS, José Guillermo
DI GIROLAMO, Elena
DURAND, Alberto
FERRARI, Juan Antonio
GIMENEZ, Francisco
HERRERA, Paulino B.
IBARGUREN, Prudencio M.
ITURBE, Alberto J.
JUAREZ, Carlos A.
LARRAURI, Juana
LUCCO, Francisco E.
NAVARRO, Ramón M.
PIERANGELI VERA, Humberto
PINEDA DE MOLINS, Ilda Leonor
RIERA, Fernando
RODRIGUEZ LEONARDI DE ROSALES, Elvira E.
RUIZ VILLASUSO, Eduardo Pío
TEISAIRE, Alberto
VELAZCO, J. Filomeno
XAMENA, Carlos
ZAVALA OBIZ, Ricardo

SUMARIO

I.—Asuntos entrados:

I.—Comunicaciones de la Honorable Cámara de Diputados.

II.—Comunicación de la Presidencia del Honorable Senado.

III.—Despacho de comisiones.

2.—A moción del senador De Paolis, se fija el asunto a tratar en la sesión de la fecha.

3.—Consideración del despacho de las comisiones de Educación y de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo, sobre reforma de la ley universitaria. Se aprueba.

I.—Sanción del Honorable Senado.

II.—Comunicación al Poder Ejecutivo.

—En Buenos Aires, a los once días del mes de diciembre de 1953, siendo las 10 y 15, dice el

Sr. Presidente (Teisaire). — La sesión está abierta.

1

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Teisaire). — Se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

tos a que se refiere el artículo 24 en forma tal que deje de revestir el carácter de suficientemente representativa a que alude el inciso c) del artículo 23.

Igualmente podrá suspender a la asociación en el ejercicio de las citadas personalidades o dejarlas sin efecto, en el supuesto de que sus autoridades incurran en violación a las disposiciones estatutarias o no den cumplimiento a las resoluciones dictadas por autoridad competente en ejercicio de facultades legales.

En ningún caso el Estado podrá intervenir en la dirección o administración de una asociación profesional, tenga ésta o no personalidad gremial o económica.

Art. 32. — La resolución denegatoria que se dicte en virtud de lo dispuesto por el artículo 27 y la que se adopte de conformidad con lo estatuido por el artículo 31, será recurrible por ante el Poder Ejecutivo.

Art. 33. — A partir de la vigencia de la presente ley, todo lo relativo a la personería jurídica de las asociaciones profesionales de empleadores que hubieren obtenido personalidad gremial o económica, estará a cargo del Ministerio de Trabajo y Previsión.

Art. 34. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dios guarde al señor presidente.

ANTONIO J. BENÍTEZ.
Eduardo T. Oliver.

II

Comunicación de la Presidencia del Honorable Senado

Sr. Secretario (Reales). — La Presidencia informa que con fecha 10 del corriente mes, se ha comunicado al Poder Ejecutivo la sanción definitiva del proyecto de ley sobre institución de medallas al mérito artístico, científico y técnico (1).

III

Despacho de comisiones

EDUCACIÓN, Y DE PRESUPUESTO, HACIENDA Y ASUNTOS ECONÓMICOS:

En el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, por el que se modifica la ley universitaria. (Al orden del día.)

2

MOCION

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Hago moción para que en la sesión de la fecha se considere el orden del día 109, que contiene el despacho de las comisiones de Educación, y de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, en el proyecto de ley sobre reforma de la ley universitaria.

—Apoyado.

(1) Ver Apéndice.

Sr. Presidente (Teisaire). — En consideración la moción formulada por el señor senador por Mendoza.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar.

—Se vota y resulta afirmativa.

3

REFORMA DE LA LEY UNIVERSITARIA

—Se lee:

Despacho de las comisiones

Honorable Senado:

Vuestras comisiones de Educación y de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos han considerado el mensaje y proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, sobre reformas de la ley universitaria; y, por las razones que darán sus miembros informantes, os aconsejan su aprobación con las siguientes modificaciones:

1. — Reemplazar el inciso 5º del artículo 1º, por el siguiente:

5º El otorgamiento de los títulos o diplomas para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo.

2. — Reemplazar el artículo 3º, por el siguiente:

Artículo 3º — Ninguna institución pública o privada podrá otorgar, sin ley especial que lo autorice, títulos, grados u honores que puedan ser confundidos con los universitarios.

3. — Reemplazar el artículo 10, por el siguiente:

Artículo 10. — Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino nativo y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y tener treinta años de edad.

4. — Reemplazar el inciso 9º, del artículo 11, por el siguiente:

9º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional de cada cátedra.

5. — Reemplazar el inciso 6º y el inciso 14 del artículo 15, por los siguientes:

6º Revalidar, habilitar y reconocer los títulos o diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada

caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas. Será condición indispensable para el ejercicio de las actividades profesionales el cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente.

14. Aprobar el proyecto de presupuesto general de la universidad y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma.

6. — Suprimir el inciso 8º, y reemplazar los incisos 9º y 11 del artículo 25, por los siguientes:

9º Elevar al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios, y proponer al Consejo Universitario los profesores extraordinarios.

11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones, con aprobación del Consejo Universitario.

7. — Agregar como artículo 26, el siguiente:

Artículo 26. — Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de la universidad, con excepción de los cargos directivos y docentes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato, hasta después de dos años de fenecido éste. Los aspirantes a cátedras ya existentes podrán presentarse al concurso, previa renuncia como miembros del consejo directivo.

8. — Reemplazar el artículo 26, que pasa a ser 27, por el siguiente:

Artículo 27. — Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino nativo, y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.

9. — Reemplazar los incisos 3º y 7º del artículo 28, que pasa a ser 29, por los siguientes:

3º Firmar, juntamente con el rector, los títulos o diplomas universitarios.

7º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico-profesional de cada cátedra.

10. — Reemplazar el artículo 40, que pasa a ser 41, por el siguiente:

Artículo 41. — Para ser admitido al concurso se requiere ser ciudadano argen-

tino, poseer antecedentes morales inobjectables, poseer título o diploma universitario nacional con cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.

11. — Reemplazar el artículo 46, que pasa a ser 47, por el siguiente:

Artículo 47. — Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra, el que no podrá exceder en total del equivalente a un promedio de dos por cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos requerirán aprobación del Consejo Universitario.

12. — Reemplazar el inciso 1º del artículo 48, que mantiene la misma numeración, por el siguiente:

1º Colaborar en las tareas de la cátedra de acuerdo con la reglamentación que dicte la facultad, a cuyo efecto deberán:

- a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
- b) Formar parte de las mesas examinadoras;
- c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;
- d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza que se les encomienden;
- e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos.

13. — Reemplazar el artículo 47, que pasa a ser 49, por el siguiente:

Artículo 49. — Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta su comportamiento moral y docente, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados, cesarán automáticamente en sus funciones.

14. — Reemplazar el artículo 55, que pasa a ser 56, por el siguiente:

Artículo 56. — El rector y el vicerrector de la universidad, los decanos, directores de escuelas o institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto de la Nación.

15. — Reemplazar el artículo 58, que pasa a ser 59, por el siguiente:

Artículo 59. — Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado, alumno regular de uno de los tres últimos años de estudio, y proveniente de entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.

16. — Reemplazar el primer párrafo del artículo 60, que pasa a ser 61, por el siguiente:

Artículo 61. — El Consejo Nacional Universitario estará constituido por los rectores de todas las universidades del país, será presidido por el ministro secretario de Estado de Educación de la Nación, y tendrá, además de las funciones que expresamente le acuerda la presente ley, las siguientes:

17. — Reemplazar el artículo 63, que pasa a ser 64, por el siguiente:

Artículo 64. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad con lo previsto por el apartado 1 del artículo 63 de la presente ley, los créditos que, en la medida de las necesidades de cada organismo universitario, sean indispensables para su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 cada universidad no haya podido atender con las disponibilidades con que hubiere contado, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacional para cubrir insuficiencias de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos con los recursos a que se refiere el artículo 3º de la ley número 13.654.

18. — Agregar como artículo 70, el siguiente:

Artículo 70. — Los concursos para la provisión de cargos de profesores titulares

y adjuntos, en trámite a la fecha de la sanción de la presente ley, se regirán por las disposiciones de la reglamentación bajo la cual se llamó a concurso.

19. — Agregar como artículo 71, el siguiente:

Artículo 71. — Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47, los profesores adjuntos designados por el Consejo Universitario al 31 de octubre de 1953, tendrán derecho a la percepción de las remuneraciones a que se refieren los artículos 56 y 57.

20. — Reemplazar el artículo 69, que pasa a ser 72, por el siguiente:

Artículo 72. — La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogadas la ley 13.031 y todas las disposiciones que se opongan a la presente.

Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.

21. — Agregar como artículo 73, el siguiente:

Artículo 73. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 90 del reglamento, el presente despacho pasa directamente al orden del día.

Sala de las comisiones, diciembre 10 de 1953.

María Rosa Calviño de Gómez. — Alberto Durand. — Rodolfo Antonio Angulo. — Alberto J. Iturbe. — Francisco Giménez. — Eduardo Pío Ruiz Villasuso. — Blas Brisoli. — Fernando Riera. — Susana Correché.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

TITULO I

De las universidades

CAPITULO I

De la misión y organización de las universidades

Artículo 1º — Las universidades argentinas cumplirán su misión con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, a cuyo efecto tendrán los siguientes objetivos:

- 1º La enseñanza en el grado superior y el desarrollo de la cultura y la afirmación

de la conciencia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la Constitución;

- 29 La integral formación humana de sus docentes y estudiantes, con preferencia a toda especialización técnica e inculcándoles la noción de su responsabilidad social y la conciencia de que han de servir al pueblo;
- 30 La organización de la investigación científica, la creación y sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones y actividades científicas, literarias y artísticas;
- 40 La creación de un cuerpo de docentes altamente especializados y consagrados a la enseñanza;
- 50 El otorgamiento de los títulos para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo;
- 60 La promoción de las relaciones culturales con las entidades similares de los demás países;
- 70 Asegurar la gratuidad de los estudios;
- 80 Interesarse por los problemas nacionales;
- 90 Prestar a los organismos del gobierno el asesoramiento que les fuere requerido;
10. Instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura;
11. Organizar sus servicios asistenciales.

Art. 29 — Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, cursos dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución.

Art. 30 — Ninguna institución pública o privada podrá usar la expresión «universidad», o sus derivadas, en su denominación o en los títulos que expida, salvo ley especial.

Art. 40 — El territorio nacional se dividirá en regiones universitarias, dentro de las cuales ejercerá jurisdicción la respectiva universidad. Corresponde a cada una de ellas organizar dentro de su zona de influencia los estudios regionales y promover las artes técnicas y aplicadas con vistas a la explotación de sus riquezas y al incremento de las actividades económicas locales.

Art. 50 — Integran las universidades:

- 10 Las facultades y escuelas, con los organismos que establezcan sus reglamentaciones;
- 20 Los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria y los que se incorporen posteriormente bajo la misma dependencia;

- 30 Los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueren puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad competente.

Art. 60 — Las universidades cuentan con autonomía docente y científica y gozan de la autarquía que en el orden administrativo les confiere la presente ley.

Art. 70 — Las universidades poseen plena capacidad jurídica para adquirir, vender y administrar toda clase de bienes, así como para demandar y comparecer en juicio. Su representación compete al rector, quien podrá delegarla y otorgar, en su caso, los poderes necesarios.

CAPÍTULO II

Del gobierno de la universidad

Art. 80 — El gobierno de cada universidad será ejercido por un rector y un Consejo Universitario.

Del rector

Art. 90 — El rector será designado por el Poder Ejecutivo y durará tres años en sus funciones.

Art. 10. — Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario y 30 años de edad.

Art. 11. — Sin perjuicio de las demás funciones que le atribuye la presente ley y las que le fijen otras disposiciones legales, el rector tendrá las siguientes:

- 10 Representar legalmente a la universidad;
- 20 Designar las personas que llevarán la representación oficial de la universidad;
- 30 Designar y remover al secretario y prosecretario de la universidad, que deberá tener título universitario;
- 40 Convocar al Consejo Universitario a reuniones ordinarias y extraordinarias;
- 50 Firmar los títulos, diplomas y distinciones universitarias;
- 60 Designar los decanos de las facultades;
- 70 Resolver las cuestiones que no se hallen expresamente reservadas al Consejo Universitario o a las autoridades de las facultades;
- 80 Dirigir la administración general de la universidad, pudiendo recabar de las facultades y demás organismos universitarios los informes que estime convenientes;
- 90 Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional. Proponer al Poder Ejecutivo, para su confirmación, el personal administrativo que hubiere nombrado;

10. Adoptar las medidas urgentes para el buen gobierno de la universidad, dando cuenta de ello al Consejo Universitario;
11. Ejercer la jurisdicción policial y disciplinaria en el asiento del rectorado y del consejo;
12. Conceder las licencias en los casos señalados por las reglamentaciones pertinentes;
13. Publicar, dentro del primer trimestre de cada año, una memoria que consigne la tarea docente y la gestión administrativa realizada, dando cuenta al Consejo Universitario.

Art. 12. — El rector tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Del vicerrector

Art. 13. — El vicerrector ejercerá las funciones del rector:

- a) En caso de ausencia o impedimento;
- b) Cuando por cualquier causa el cargo quedare vacante;
- c) Cuando le fueren delegadas.

Para el caso de ausencia o impedimento del rector y vicerrector, o de vacancia, se hará cargo del rectorado el consejero de mayor edad, quien deberá dar cuenta de ello al Poder Ejecutivo.

Del Consejo Universitario

Art. 14. — El Consejo Universitario estará constituido por el rector, que lo presidirá, y por los decanos y vicedecanos de cada facultad.

Art. 15. — El Consejo Universitario tendrá las siguientes atribuciones, sin perjuicio de las demás que se le acuerdan en esta ley:

- 1º Elegir un vicerrector entre sus miembros, que durará tres años en funciones;
- 2º Dictar su reglamento interno y las ordenanzas que requiera el funcionamiento de la universidad;
- 3º Ejercer la jurisdicción superior universitaria y resolver en última instancia universitaria las cuestiones contenciosas que hayan fallado el rector o las facultades;
- 4º Resolver la intervención de las facultades, cuando su funcionamiento no se ajuste a la presente ley;
- 5º Decidir en última instancia las cuestiones sobre validez o equivalencia de títulos, diplomas, estudios, asignaturas, honores y distinciones universitarias, que hubieran sido resueltas por los consejos de las facultades;
- 6º Revalidar, habilitar y reconocer los diplomas expedidos por universidades

extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas;

- 7º Resolver lo conducente al ejercicio de la personalidad jurídica de la universidad;
- 8º Aprobar o devolver observadas a las facultades las ternas formuladas por éstas para la designación de profesores titulares, así como las reglamentaciones que dicten aquéllas para el nombramiento de profesores adjuntos, extraordinarios y honorarios. El Consejo Universitario sólo tiene facultad para considerar el aspecto formal de las ternas y las objeciones morales a los candidatos, nunca el orden de los nombres ni la competencia científica y didáctica, que son privativos de cada facultad;
- 9º Proponer al Poder Ejecutivo la creación de nuevas facultades;
10. Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, la creación de nuevas escuelas o institutos;
11. Aprobar los planes de estudio y los reglamentos que dicte cada facultad sobre sus respectivas carreras;
12. Acordar, por iniciativa propia o a propuesta de las facultades, el título de doctor honoris causa, o de miembro honorario de la universidad, o las personas que sobresalieren por su obra, o por su labor científica, literaria o artística;
13. Fijar la fecha de iniciación y terminación del curso lectivo y duración de las vacaciones;
14. Aprobar el presupuesto general de la universidad y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma;
15. Vender, con autorización del Poder Ejecutivo, los bienes inmuebles, títulos y valores pertenecientes a la universidad;
16. Aceptar las herencias con beneficio de inventario, y los legados o donaciones que se dejen o hagan a las universidades o a las facultades o establecimientos que las integren;
17. Dictar los reglamentos para el régimen común de los estudios y disciplina general de los establecimientos universitarios, con sujeción a las normas que dicte el Consejo Nacional Universitario.

TITULO II

De las facultades

Del gobierno de las facultades

Art. 16. — El gobierno de cada facultad será ejercido por un decano y un consejo directivo, los que durarán tres años en sus funciones.

Art. 17. — Cuando el cargo de decano quedare vacante, el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el período.

Del consejo directivo y de la designación de decano

Art. 18. — El consejo directivo se integrará con el decano y once consejeros.

La elección de consejeros se efectuará en comicios de profesores, quienes votarán personalmente, en forma secreta, las listas de candidatos que depositarán en dos urnas distintas; una reservada para los profesores titulares, que votarán de entre ellos, por siete candidatos a consejeros titulares e igual número de substitutes; y otra para los profesores adjuntos, que votarán en la misma forma que los titulares, pero solamente por cuatro candidatos a consejeros titulares y otro número igual de substitutes.

Los consejeros que dejen de ser profesores, cesarán inmediatamente en el ejercicio del cargo.

Art. 19. — Para aquellas facultades que no estén en condiciones de ajustarse a las proporciones indicadas en el artículo precedente, el Consejo Universitario determinará las que hagan posible la constitución del consejo directivo y establecerá el quórum para sus reuniones.

Art. 20. — El escrutinio y proclamación de los candidatos elegidos serán hechos por el decano, asistido por el vicedecano y el consejero titular de más edad.

Art. 21. — El decano será designado por el rector. En caso de que el nombramiento del decano recaiga en uno de los consejeros, el consejo directivo será integrado por el consejero substituto que corresponda a la categoría del profesor designado decano.

Art. 22. — Las vacantes de consejeros titulares que se produzcan antes de la fecha de renovación, serán llenadas por sorteo, que se realizará entre los consejeros substitutes de titulares o de adjuntos, según sea la vacante producida y manteniendo la representación de las escuelas.

Art. 23. — Si por sucesivas vacantes o ausencias quedara agotado el número de consejeros substitutes, el consejo directivo — aun en minoría — designará de entre los profesores, según sea la vacante, el que deba llenarla para completar el período.

Art. 24. — Las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de siete consejeros.

Art. 25. — El consejo directivo tendrá las siguientes atribuciones:

- 1º Designar vicedecano entre sus miembros;
- 2º Dictar el reglamento de la facultad y las ordenanzas que requiera su funcionamiento;
- 3º Proponer al Consejo Universitario la adopción de la estructura departamental en el orden docente de la facultad;

4º Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación o supresión de escuelas, como también la proporción en que estarán representadas en el consejo directivo y la creación de institutos o cursos de investigación y para graduados;

5º Confeccionar y modificar los planes de estudios de las carreras o cursos especiales, aprobándolos en primera instancia;

6º Decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción, de acuerdo con lo que reglamente en general el Consejo Nacional Universitario;

7º Organizar las actividades de extensión universitaria atinentes a cada facultad;

8º Establecer, en cada caso, con la aprobación del Consejo Universitario, el régimen de consagración exclusiva a la enseñanza;

9º Elevar al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios;

10. Ejercer, con respecto a los profesores, la potestad disciplinaria con arreglo a la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;

11. Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones;

12. Proyectar el presupuesto de la facultad;

13. Organizar la distribución o venta de publicaciones y productos.

Del decano

Art. 26. — Para ser decano se requiere ser ciudadano argentino, y ser profesor titular o adjunto confirmado en la respectiva facultad.

Art. 27. — El decano tendrá voz y voto en las decisiones del consejo, prevaleciendo el suyo en caso de empate.

Art. 28. — El decano tendrá las siguientes funciones:

1º Convocar y presidir las sesiones del consejo directivo;

2º Representar a la facultad.

3º Firmar, juntamente con el rector, los diplomas universitarios;

4º Dar cuenta mensualmente al consejo directivo de la asistencia de los profesores;

5º Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de los consejos universitario y directivo y del rector;

- 6º Autorizar el ingreso de alumnos y expedir certificados de promoción, con arreglo a las ordenanzas y reglamentos correspondientes;
- 7º Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional. Proponer al Poder Ejecutivo, por conducto del rector, para su confirmación, al personal administrativo que hubiere nombrado;
- 8º Acordar a los profesores licencias, de conformidad con la reglamentación que dicte el Consejo Nacional Universitario;
- 9º Ejercer la vigilancia de la enseñanza, y la jurisdicción policial y disciplinaria dentro de la facultad;
10. Dirigir la administración de la facultad y rendir cuenta de la inversión de los fondos;
11. Designar y remover al secretario de la facultad, el que deberá ser egresado universitario;
12. Fijar las fechas de examen, número de turnos y orden de los mismos;
13. Despachar los asuntos de trámite, con el simple dictamen de la comisión respectiva del consejo directivo, salvo discrepancia, en cuyo caso el asunto será tratado por el consejo.

Del vicedecano

Art. 29. — El vicedecano durará tres años en funciones. Ejercerá las del decano durante la ausencia o impedimento de éste, o las que el mismo le delegare. En caso de vacancia del vicedecanato, el consejero que se haga cargo del mismo, completará el período.

Art. 30. — En caso de ausencia, impedimento, renuncia o fallecimiento del vicedecano en ejercicio del decanato, asumirá las funciones de vicedecano interino el consejero profesor titular de mayor antigüedad en la cátedra.

TITULO III

De los profesores

Disposiciones generales

Art. 31. — Las universidades tendrán cuatro categorías de profesores: titulares, adjuntos, extraordinarios y honorarios, no pudiendo crearse nuevas categorías.

Art. 32. — El profesor universitario, sea titular o adjunto, no podrá acumular más de uno de estos cargos en la misma facultad, ni en otras facultades y universidades. Son incompatibles, por lo tanto, los cargos de profesor titular con el de adjunto, o los de profesor adjunto en más de una asignatura, en la misma o en distintas facultades o universidades. No podrán los profesores prestar sus servicios profesionales en

favor de intereses que estén en pugna, competencia o colisión con los de la Nación, provincias o municipios, salvo los casos de defensa de intereses personales del profesor, su cónyuge, ascendientes o descendientes, siendo pasible, si lo hiciere, de suspensión, cesantía o exoneración.

Art. 33. — La responsabilidad científico-legal de la enseñanza y doctrinas expuestas en clase concierne exclusivamente a los profesores que las dicten y a ellos corresponde la propiedad científica, intelectual, artística o literaria de su enseñanza. Lo establecido precedentemente no se aplicará a los casos de investigaciones organizadas por la universidad, facultades e institutos.

Art. 34. — Los profesores podrán ser separados por las siguientes causas:

- 1º Condena criminal, que no sea por hecho culposos;
- 2º Abandono de sus funciones o negligencia grave en el ejercicio de las mismas;
- 3º Inconducta manifiesta;
- 4º Incapacidad sobreviniente.

De los profesores titulares

Art. 35. — Los profesores titulares tienen a su cargo la dirección y ejercicio de la enseñanza teóricopráctica de su asignatura y el desempeño autonómico de la cátedra.

Art. 36. — Los profesores titulares serán designados por el Poder Ejecutivo de la Nación, de una terna de candidatos elevada por la universidad, previo concurso de méritos, aptitudes técnicas y pedagógicas, títulos, antecedentes y trabajos.

Art. 37. — Producida una vacante de profesor titular, se llamará a concurso dentro de un plazo no mayor de tres meses, poniéndose interinamente la cátedra a cargo de un profesor adjunto correspondiente a la misma materia y, a falta de éste, podrá designarse otro profesor de materia afín.

Art. 38. — El consejo directivo de cada facultad designará, en cada caso, un comisión asesora compuesta por tres miembros, sorteados entre un mínimo de diez profesores titulares, de la misma materia si los hubiere, y de las materias afines a la cátedra, de la misma facultad y/o de otras universidades, si no alcanzare a integrarse con los de aquella.

El orden de afinidad entre las materias se establecerá con carácter permanente por las facultades al aprobar los respectivos planes de estudios.

Art. 39. — La comisión asesora elevará al consejo directivo de la facultad una terna por orden de méritos, títulos, antecedentes y trabajos, la que quedará sujeta a las siguientes condiciones:

1º El consejo directivo de la facultad podrá observar el aspecto formal de las terna, variar su orden o integrarlas en forma distinta a la propuesta por la comisión asesora, requiriéndose para esto último dos tercios de votos de los miembros presentes;

2º La terna será elevada a la universidad, que juzgará sobre los aspectos formales del concurso. En caso de que el consejo directivo hubiere modificado el dictamen de la comisión asesora, elevará un informe fundado al Consejo Universitario, exponiendo los motivos y antecedentes que determinaron la modificación de la terna;

3º La universidad después de aprobar la terna la elevará al Poder Ejecutivo juntamente con todos los antecedentes del concurso.

Art. 40. — Para ser admitido al concurso se requiere ser ciudadano argentino, poseer antecedentes morales inobjectables, poseer diploma universitario nacional con cinco años por lo menos de antelación y haber acreditado aptitudes docentes o trabajos científicos en la correspondiente especialidad o en materia de íntima conexión con ella.

Art. 41. — Las terna para profesor titular deberán formarse previo dictamen escrito y fundado de la comisión asesora del consejo directivo.

Para configurar la terna se tendrá en cuenta en forma preferente, el cargo de profesor adjunto, en caso de igualdad de antecedentes. A los concursantes que no fueran profesores adjuntos, el consejo directivo podrá exigirles una prueba complementaria. La actividad científica y docente del candidato deberá ser continua y comprobada mediante publicaciones y cursos que se estimarán no sólo por el número sino también y en primer término, por el mérito intrínseco.

Art. 42. — Cuando se haya declarado desierto un llamado a concurso por no haberse podido integrar la terna se procederá a un segundo llamado. En caso de repetirse la situación anterior el consejo directivo deberá dictaminar sin el requisito de la terna.

Art. 43. — Los profesores titulares pueden presentarse a concurso para optar a otra cátedra, pero si la obtuviesen estarán obligados a renunciar a la cátedra que hubieren estado dictando. Los profesores adjuntos se considerarán presentados automáticamente a los concursos de las cátedras titulares cuya adjunta ejercen, salvo manifestación expresa en contrario.

Art. 44. — Son funciones de los profesores titulares:

1º Conducir la enseñanza de la cátedra, a cuyo efecto deberán: a) Presentar anual-

mente al consejo directivo, para su aprobación, el programa de la materia; b) Distribuir la enseñanza con los profesores adjuntos; c) Formar parte de las mesas examinadoras; d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza que se les encomienden; e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que se dicten;

2º Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;

3º Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;

4º Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que le fuere requerido por conducto del consejo directivo.

De los profesores adjuntos

Art. 45. — Los profesores adjuntos serán nombrados por concurso por el consejo directivo, con aprobación del Consejo Universitario, de acuerdo con la reglamentación pertinente.

Para ser admitido al concurso se requieren las mismas condiciones exigidas en el caso de los profesores titulares, salvo la antigüedad como egresado que se reduce a dos años. Podrá admitirse a los concursos para profesores adjuntos, aun cuando no hayan seguido la carrera docente, aquellos candidatos de reconocida personalidad científica, probada con trabajos o actuación docente. En tal caso se requerirá ser propuesto por cuatro consejeros de la facultad.

Art. 46. — Cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra. Todas las ordenanzas relativas al régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos, requerirán aprobación del Consejo Universitario.

Art. 47. — Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta lo siguiente: su comportamiento moral; haber dictado por lo menos dos cursos complementarios, según la reglamentación de cada facultad, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad.

Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados cesarán automáticamente en sus funciones.

Art. 48. — Son funciones de los profesores adjuntos:

19 Colaborar en las tareas de la cátedra, a cuyo efecto deberán:

- a) Participar en la enseñanza de acuerdo con la distribución que haga el profesor titular;
- b) Formar parte de las mesas examinadoras;
- c) Reemplazar a los titulares en el desempeño de sus cátedras y demás funciones;
- d) Desempeñar las comisiones relacionadas con la enseñanza, que se les encomienden;
- e) Colaborar en las publicaciones de la universidad y facultad y en las investigaciones de los institutos. Todo ello con arreglo a las reglamentaciones que dicte la facultad;

20 Participar en las elecciones de consejeros y desempeñar este cargo en caso de ser elegido para el mismo;

39 Establecer con sus colegas y alumnos una relación de convivencia adecuada al sentido humanista y de solidaridad social de la universidad;

40 Prestar al Poder Ejecutivo la colaboración y asesoramiento que les fuere requerido por conducto del consejo directivo.

De los profesores extraordinarios

Art. 49. — El Consejo Universitario, a propuesta del consejo de la facultad, podrá solicitar al Poder Ejecutivo la contratación de profesores extraordinarios por un plazo que no deberá exceder de cinco años. La remuneración y las funciones de los mismos serán determinados en cada caso por la facultad respectiva al formular la propuesta.

De los profesores honorarios

Art. 50. — Al profesor que se retire de la enseñanza se le podrá otorgar, por el consejo directivo, en los casos de haberse destacado por su actuación, el título de profesor honorario, con el voto de las dos terceras partes de sus miembros y con la aprobación del Consejo Universitario en igual forma.

El título de profesor honorario es vitalicio. Sus funciones serán determinadas por las reglamentaciones de cada facultad, con la aprobación del Consejo Universitario.

De la carrera docente

Art. 51. — Todo egresado de la universidad, con cinco o más años de ejercicio profesional

que reúna trabajos, títulos y antecedentes científicos suficientes, podrá solicitar al consejo directivo un permiso para enseñar, y cumplidos los requisitos exigidos para demostrar su capacidad docente, que establecerá cada facultad, se le conferirá permiso para enseñar en carácter de *venia docendi*. Sus antecedentes como tal serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

El régimen de la enseñanza del *venia docendi*, será reglamentado por cada facultad.

Art. 52. — Cada facultad reglamentará su carrera docente ajustándose a las siguientes bases:

19 El aspirante a profesor universitario cursará un periodo de adscripción a una determinada cátedra, durante el cual realizará trabajos de investigación o seminario, bajo la dirección del respectivo profesor, y ejercicios docentes en la materia de su adscripción; completará su preparación con cursos obligatorios sobre materias de cultura general. Podrán implantarse o no, según las características de cada facultad, exámenes finales para la aprobación de las materias de adscripción;

20 Cumplido esto, el aspirante a profesor pasará a ejercer la docencia complementaria bajo la dirección del profesor titular y durante el tiempo que fijará cada facultad para cada asignatura;

39 Terminada esta etapa, y previo un examen general de competencia técnica y docente sobre la materia de su dedicación, será reconocido como docente autorizado;

40 El docente autorizado tendrá las obligaciones que le fije cada facultad y sus antecedentes serán tenidos en cuenta con preferencia en los concursos de profesor adjunto.

De los claustros universitarios

Art. 53. — Constituyen el claustro general de profesores, todos los docentes titulares y adjuntos de cada facultad. Podrán también constituirse claustros parciales de las diversas escuelas, por separado, para considerar exclusivamente los resultados del plan de estudios y las reformas que se sugieran.

Los claustros serán citados y presididos por el decano de cada facultad.

Art. 54. — El decano citará el claustro general o parcial cuando lo considere conveniente, pudiendo consultarlos por escrito.

TITULO IV

De las remuneraciones

Art. 55. — El rector y el vicerrector de la universidad, los decanos, directores de escuelas

o institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas, que fije la ley general de presupuesto de la Nación a propuesta del Consejo Nacional Universitario.

Art. 56. — Los profesores titulares y adjuntos y el personal diplomado auxiliar de la docencia, gozarán de un aumento del 10 % en sus remuneraciones, cada 5 años de ejercicio de la docencia universitaria.

TITULO V

De los estudiantes

Art. 57. — Los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen y todo lo atinente al régimen del estudiante, será reglamentado por el Consejo Nacional Universitario.

Art. 58. — Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado de la entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles.

De la enseñanza para graduados

Art. 59. — Las facultades reglamentarán la enseñanza para graduados, organizando centros de graduados y cursos de perfeccionamiento o especialización.

TITULO VI

Del Consejo Nacional Universitario

Art. 60. — El Consejo Nacional Universitario estará constituido por los rectores de todas las universidades del país, será presidido por el ministro de Educación de la Nación y tendrá las siguientes funciones:

1. Coordinar la obra docente, cultural y científica de las universidades, de modo que consulte los intereses y problemas del país y de cada región universitaria;
2. Asesorar al gobierno en todos los asuntos relativos a la actividad universitaria, especialmente en la creación, supresión o transformación de universidades e institutos superiores;
3. Armonizar y uniformar los planes de estudio, condiciones de ingreso, sistemas de promoción, número de cursos y títulos a otorgar para las mismas carreras;
4. Reglamentar y aconsejar lo concerniente a la extensión universitaria de cada universidad;
5. Coordinar, planificar y racionalizar las normas que regirán las publicaciones universitarias;

6. Promover la realización de congresos docentes universitarios;

7. Asesorar al Poder Ejecutivo en la creación, organización y funcionamiento de las academias nacionales, disponiendo lo conducente para que las universidades actúen en forma coordinada con ellas.

TITULO VII

Del patrimonio y recursos de la universidad y su administración

De los bienes de la universidad

Art. 61. — Forman el patrimonio de la universidad los bienes que en virtud de ley o por otro título gratuito u oneroso, correspondan al dominio de la universidad, así como las colecciones científicas y publicaciones que tengan las facultades, institutos o dependencias universitarias.

De los recursos, donaciones y cuentas

Art. 62. — Son recursos de las universidades:

1. Las contribuciones de rentas generales que anualmente fije el presupuesto general de la Nación para cada organismo o en particular para sus facultades, institutos y establecimientos;
2. Los frutos, intereses y rentas de sus bienes patrimoniales;
3. Las donaciones de terceros a su favor o en beneficio de sus facultades, institutos o establecimientos;
4. Todo otro recurso que le corresponda o se le asigne.

Para compensar las contribuciones mencionadas en el apartado 1 del presente artículo, incorporáanse a rentas generales los recursos a que se refiere la primera parte del artículo 8º de la ley 13.558.

Art. 63. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para incorporar al presupuesto general de la Nación, con cargo a rentas generales durante el ejercicio de 1954, de conformidad con lo previsto por el apartado 1 del artículo 62 de la presente ley, los créditos que en la medida de las necesidades de cada organismo universitario, sean indispensables para su desenvolvimiento en el citado ejercicio. Queda asimismo autorizado el Poder Ejecutivo para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre de 1953 cada universitario no haya podido atender con las disponibilidades con que hubiere contado, inclusive los anticipos efectuados oportunamente por el Tesoro Nacio-

nal para cubrir insuficiencias de los ingresos universitarios. Dichos gastos serán atendidos con los recursos a que se refiere el artículo 39 de la ley 13.654.

Art. 64. — El uso de las atribuciones que la presente ley confiere a los organismos universitarios no podrá traducirse en erogaciones para cuya atención no se cuente con la pertinente autorización de crédito en sus respectivos presupuestos. En este caso, así como también cuando el ejercicio de dichas atribuciones demande la modificación de la estructura presupuestaria o importe un nuevo compromiso de gastos para ejercicios futuros, deberá requerirse la previa conformidad del Poder Ejecutivo.

Art. 65. — Cuando se trate de herencias, legados o donaciones o cualquier otra liberalidad en favor de las facultades, el Consejo Universitario no podrá pronunciarse sin oír a éstas y no podrá aceptar aquellas que las facultades decidan rechazar. Estas contribuciones comprenden las condiciones o cargos que puedan imponer los testadores o benefactores. Aceptada una herencia, legado, donación u otra liberalidad, en contrato de donación, no podrá ser modificado sin oír nuevamente a la facultad beneficiada.

Art. 66. — Salvo disposición especial del Consejo Universitario, todas las dependencias universitarias que recauden fondos, los entregarán mensualmente a la tesorería de la universidad, cualquiera sea su procedencia, enviando al rector los documentos justificativos y explicativos del caso.

Art. 67. — Los fondos universitarios estarán depositados a la orden del rector, quien dispondrá de su inversión de acuerdo con el régimen financiero y contable vigente.

TITULO VIII

Art. 68. — Queda facultado el Poder Ejecutivo para reajustar los presupuestos de gastos y cálculo de recursos de las universidades a fin de adecuarlos a las disposiciones de la presente ley.

Art. 69. — La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogadas todas las disposiciones que le sean incompatibles.

Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.

Armando Méndez San Martín. —
Pedro José Bonanni.

ANTECEDENTE

Buenos Aires, 30 de noviembre de 1953.

Al Honorable Congreso de la Nación.

El Poder Ejecutivo tiene el honor de dirigirse a vuestra honorabilidad, propiciando la sanción del proyecto de ley que acompaña, por el que se modifica la ley universitaria 13.031.

La lectura de dicho proyecto llevará a vuestra honorabilidad a la conclusión de que se trata de algunas modificaciones parciales, sin alterar la estructura fundamental de la ley 13.031, con el objeto de contribuir a su mayor perfección técnica.

La sanción de la ley 13.031 ha marcado, sin duda alguna, una etapa decisiva. Significó nada menos que el tan anhelado advenimiento de la nueva universidad, señora y señora, libre de tutelajes e interferencias, de que había menester la nueva Argentina.

Cabe felizmente afirmar, a los seis años de su vigencia, que ninguna de sus instituciones fundamentales requiere ser derogada. Pero ocurre que en ese lapso han acaecido dos hechos nuevos, dos sucesos trascendentales que imponen la necesidad de una parcial revisión de la ley universitaria: por una parte, la Constitución Nacional de 1949, y por la otra, el segundo Plan Quinquenal de gobierno (ley 14.184).

En ambos documentos, en los que se precisa con nitidez el estado actual de la doctrina nacional, se menciona reiteradas veces a las universidades fijándose con inequívoca claridad sus lineamientos generales y su misión. Así, por ejemplo, la Constitución Nacional se refiere taxativamente a la autonomía universitaria, a la división del territorio nacional en regiones universitarias, a la doctrina nacional y formación política de sus estudiantes, y a las academias (artículos 37-IV-4 y 37-IV-5).

Por su parte, el segundo Plan Quinquenal alude, entre otras cosas, a la gratuidad de las enseñanzas en la universidad (IV-G-8-b), a su vinculación con los egresados (IV-G-8-f), a su deber de prestar asesoramiento al Poder Ejecutivo (IV-G-8-h), y a las precluidas regiones universitarias (IV-E-12-b).

Tan claros resultan los designios expresados en la Constitución Nacional y en el segundo Plan de Gobierno, que el Poder Ejecutivo estima que se trata de mandatos cuyo cumplimiento ya no cabe postergar.

Por lo demás, no es inoportuno agregar que también existen razones de orden material que imponen la pronta revisión de la ley universitaria. Su título VII, referente a la dotación económica de las universidades, vincula la financiación de sus gastos al producido de un impuesto especial. La experiencia demuestra que ello no es conveniente, porque la satisfacción de los primordiales objetivos que el pueblo espera de sus universidades no puede estar constreñida dentro de los límites infranqueables de un impuesto determinado.

Finalmente, también ha enseñado la experiencia la ventaja de eliminar de la ley, o de simplificar, algunas enunciaciões excesivamente detallistas, más propias de una flexible reglamentación ulterior que de un cuerpo legal básico.

Por las razones expuestas, quiera vuestra honorabilidad prestar su aprobación a este proyecto, a fin de dotar a la nueva universidad argentina del instru-

mento legal que requiere para el cumplimiento de sus altos fines.

Dios guarde a vuestra honorabilidad.

JUAN PERÓN.

Armando Méndez San Martín. — Pedro José Bonanni.

Sr. Presidente (Teisaire). — En consideración.

Sra. Calviño de Gómez. — Pido la palabra.

Señor presidente: la universidad de un país es la institución más alta de su actividad cultural y científica. Ella debe ser el motor que anima ese aspecto de la vida, y es un error de caros resultados el pensar que ella puede actuar si se aísla de la sociedad en que existe, si no comprende los intereses que mueven a los hombres que ella recibe y forma.

Se equivoca quien crea que la universidad que se desenvuelve en una sociedad de trabajadores puede formar profesionales oligarcas o investigadores al servicio de intereses mezquinos, como si del ambiente medieval se esperara formar científicos, o cuando contando con hombres comúnmente dotados se quisiera hacer, de todos ellos, hombres sabios.

Toda universidad trae raíces en la historia del pueblo que le dió vida, se nutre de su pasado, de ese lapso de sacrificios y de lucha que ha hecho el presente y en el que está ya todo el porvenir, pero debe avanzar a la par de ese mismo pueblo. Toda fuerza que se oponga al avance de la vida, o que no la comprenda, toda institución que se obstine en vivir en otra época o que olvide el medio en que actúa ha de ir irremediablemente al fracaso.

Nuestra universidad no siempre ha comprendido su propia misión y, muchas veces, ha vivido con las puertas cerradas a los llamados de su pueblo. En los regímenes de privilegio, ella se había puesto al servicio de los privilegiados. Cara y pretenciosa, la universidad estaba de espaldas al país, cuyos hijos con tanta dificultad apenas podían llegar a ella. El general Perón ha explicado este proceso de abrir las puertas de la universidad nacional a todos los hermanos argentinos con estas palabras: «No olvidemos al pueblo y no dejemos que vuelva a producirse un divorcio entre las universidades y las masas populares. Únicamente habrá unión entre la universidad y el pueblo cuando éste tenga efectiva entrada en los claustros universitarios y cuando la labor que éstos realizan se traduzca en obras de beneficio real y positivo para todos los habitantes de esta gran Nación que va siendo la Argentina. Que las discrepancias entre los hombres sean eliminadas; que las luchas entre hermanos no vuelvan a producirse jamás; antes bien, que florezcan el amor y la comprensión entre los argentinos; que la comprensión, el respeto y la generosidad sean nuestras divisas más preciadas; que un solo abrazo una a los hombres

de nuestra patria en un solo anhelo de amarla, de servirla y de enaltecerla.»

Y para que pueda realizar con los mejores resultados los fines que le han sido señalados a la universidad: de transmitir la cultura, formar los profesionales e investigadores y educar a los nuevos hombres de ciencia, se sancionó la ley 13.031, cuya reforma auspicia ahora el Poder Ejecutivo, inspirada en el pensamiento rector del presidente que desea «que haya una universidad que se dedique a enseñar y aprender, y realice, asimismo, investigaciones científicas que levanten el nivel de nuestra ciencia. En esta forma, algún día podremos ver materializada nuestra máxima aspiración, es decir, que la ciencia sirva dentro de nuestro país para el mejor bienestar colectivo y fuera del mismo para que la capacidad de nuestros profesionales y el resultado de sus investigaciones constituya un orgullo para la República Argentina».

La experiencia aconseja la modificación de la actual ley universitaria para adaptarla a los postulados de la nueva Constitución de Perón y en cumplimiento del segundo Plan Quinquenal y para darle, a la vez, mayor agilidad.

La universidad argentina, desde la más antigua, la de Córdoba, fundada a comienzos del siglo XVII cuando el obispo fray Fernando de Trejo y Sanabria «donaba sus bienes para la fundación, según la escritura, de estudios de latín, artes y teología, como medio importantísimo para el bien espiritual y eterno de españoles e indios», y siguiendo por la de Buenos Aires, inaugurada con el auspicio de Bernardino Rivadavia durante el gobierno de Martín Rodríguez en 1821; la casa de Joaquín V. González, en la ciudad de Eva Perón, erigida en Universidad Nacional en 1905; la del litoral, creada por ley de 1919 sobre la base de una universidad provincial, y la de Tucumán, enclavada desde 1921 en la región progresista del Norte, para llegar a la más joven de las universidades argentinas, la de Cuyo, creada en 1939, y que, bajo el estímulo del general Perón, ha alcanzado un desarrollo increíble para sus pocos años; la universidad argentina, decía, comprendiéndolas a todas, ha multiplicado sus esfuerzos y sus resultados desde que se puso al servicio del pueblo. Mientras cerraba las ventanas por donde llegaron muchos privilegiados de la oligarquía subiendo por las cuerdas trenzadas de los intereses personales, ajenos a las verdaderas aspiraciones de la auténtica masa laboriosa.

Nuestro presidente ha dejado plena libertad de acción para que se desenvuelvan las universidades, y ellas, como todas las instituciones nobles del país, han podido trabajar y crecer, sin más limitaciones que las naturales que surgen de la organización constitucional y de los carriles de la ley.

Desde entonces hasta ahora mucho se ha hecho en bien de la juventud, y para facilitar la verdadera misión de la universidad. Bastaría recordar, entre otras cosas, la supresión de aranceles y de los exámenes de ingreso, las facilidades que se acuerdan a los estudiantes empleados en reparticiones del Estado, la concesión de becas de estudio para ayudar a los jóvenes que necesitan recursos o que su falta les impide ocupar el tiempo necesario para seguir estudiando; las residencias para estudiantes de ambos sexos, los viajes de perfeccionamiento, etcétera.

En 1946, el presupuesto de las universidades fué de 43.234.561 pesos moneda nacional. En la actualidad alcanza a poco menos que 400 millones. Al asumir la presidencia el general Perón en aquel año, estudiaban 64.497 alumnos. El año pasado cursaron estudios universitarios 148.601 estudiantes. Concretándonos a Buenos Aires solamente, quiero destacar que, de 23.786 alumnos inscritos en 1946 en las diversas facultades y escuelas dependientes de la universidad, se ha llegado a 64.425 alumnos en el corriente año.

En la Facultad de Ciencias Económicas, por ejemplo, en 1940 cursaban sus estudios 2.478 jóvenes; este año hay 19.663 inscritos, es decir, casi ocho veces la de entonces. Le sigue Medicina, con 14.664, y Derecho y Ciencias Sociales, con 14.238. Y no sólo esto: el número de estudiantes universitarios extranjeros que se deciden a seguir estudios en nuestro país ha aumentado de 336, en 1948, a 2.236, en el año último. Y, aunque en su mayoría son jóvenes sudamericanos, unos 1.491, los hay venidos desde los más distantes lugares. Es que la política del buen vecino, cordial y sincera del general Perón, se vincula con el problema de la cultura, solucionado con el de puertas abiertas y el de la justicia efectiva para todos.

¿Cómo no comprender, entonces, la importancia de este proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, si conocemos no sólo cuál es el pensamiento del general Perón en pro de la cultura, sino que vemos lo que se está haciendo en bien de nuestra juventud y para el progreso de la ciencia?

Ahora bien, las universidades deben ejercer su influencia en todos los aspectos vitales del país. Aquellas casas herméticas en donde se guardaba celosamente la ciencia de sus maestros —que los hubo— no tienen explicación, como no pueden ser hoy, tampoco, aquellas corporaciones que se proponían el cultivo de la filosofía y que en la Edad Media fueron los centros de las grandes discusiones entre «realistas» y «nominalistas».

La universidad de hoy, la universidad que concebimos los peronistas, debe ser aquella fecunda institución que grave sobre toda la vida del país, que tome al hombre en su concep-

ción integral y lo ayude a realizar en él el ser profundamente humano, preocupado por la búsqueda permanente de la verdad, de la justicia y del bien, porque antes que eruditos sin alma debe formar al hombre digno, al investigador sincero, al divulgador de cultura o al graduado dispuesto a devolver a la sociedad lo que de ella ha recibido y que gracias a ella ha llegado a ser.

La universidad en general ha formado profesionales más o menos capaces para el ejercicio de una profesión, no siempre seguida con verdadera vocación por falta de orientación y estímulo. Pero no basta formar técnicos; hay que obtener ciudadanos cultos, profesionales eficaces, investigadores que hayan sido dirigidos por maestros de verdad, maestros que, como dice este proyecto, tengan una moral inobjetable y una consagración casi de sacerdocio, que no se desentiendan de los fines de la patria ni se encierran en una torre de marfil para satisfacer una egoísta aspiración de saber, sin frutos.

El proyecto de ley que estamos considerando cambia algunas disposiciones de la ley 13.031, a fin de adaptarla —como dice el Poder Ejecutivo en el sesudo mensaje con que lo acompaña— a las normas de la Constitución justicialista de 1949 y a las bases del segundo Plan Quinquenal, que propicia «la formación de profesionales con sentido de responsabilidad social, la universidad gratuita, práctica y especializada, complementada con una intensa investigación científica. Libre acceso a todos los centros de enseñanza, docencia altamente especializada y conveniente consagración a la enseñanza. Ubicación racional de los centros de enseñanza y adecuado equipamiento, vinculación obligatoria con los egresados, cursos para posgraduados y divulgación técnicocientífica, vinculación internacional, asesoramiento al superior gobierno de la Nación en asuntos técnicos e investigaciones».

Las comisiones de Educación y de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, después de escuchar la palabra de los señores ministros secretarios de Estado de Educación y de Hacienda, que refrendan el proyecto, han resuelto introducir algunas modificaciones para aclarar algunos artículos, y han incluido algunos nuevos, como el que se refiere a las incompatibilidades de los miembros de los consejos directivos, manteniendo la disposición que está en la ley 13.031, porque con él se establece una garantía de ética en el gobierno de la universidad, aunque bien sabemos que en la universidad del presente hay dignidad y decoro en sus autoridades, porque son peronistas.

El funcionamiento del Consejo Nacional Universitario, constituido por los rectores de todas las universidades del país, presidido por el ministro de Educación, facilitará la coordinación

de toda la tarea docente, científica y cultural de las distintas universidades del país, las que, por otra parte, mantendrán sus zonas de influencia de acuerdo con la Constitución actual, que en su artículo 37 dice: «Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumba, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.» Es decir, habrá una obra regional, resultado de la influencia recíproca del hombre y su medio, y una obra nacional, de unidad, tras la bandera de la patria, que es la bandera de Perón; una obra, en suma, al servicio del pueblo y para bien de la Nación.

Dejo a mi distinguido colega por la provincia de Jujuy, senador Iturbe, el análisis especial de las reformas proyectadas, y al señor presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, senador por Salta don Alberto Durand, la razón del nuevo régimen financiero proyectado en esta iniciativa.

La sanción de este despacho ha de beneficiar en realidad a los estudiantes, porque para ellos existe la universidad. Es un error aun no desarraigado el creer que la universidad vive para dar lustre a los catedráticos. Estos existen para aquéllos. Con sus lecciones se han de formar los que orientarán —e incluso mandarán— en la sociedad, y por ello, al pedir el voto de mis honorables colegas en apoyo de esta nueva ley universitaria, lo hago recordando las palabras de Eva Perón, que tanta fe tenía en los estudiantes argentinos. Ella, en 1947, decía a la juventud de su patria: «El general Perón ha encarado con toda amplitud el problema de la universidad, que es el problema de la juventud estudiosa argentina, idealista mil por mil. Estamos seguros de que esa juventud constituye el núcleo que ha de regir en un futuro no lejano, probablemente, los destinos de la patria, u ocupar importantísimos puestos dentro del orden nacional.»

Que este instrumento legal que damos a la universidad argentina le permita continuar siendo, y cada día lo sea más, la verdadera universidad del pueblo y para el pueblo: a cuyo servicio estamos todos los legisladores peronistas.

Nada más, señor presidente. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Angulo. — Pido la palabra.

Largas noches sin aurora vivió la patria hasta que se asomó a la historia la figura de

un coronel, que supo envainar su espada y desenvainar su vida, para mostrar su corazón y su cerebro, engarzados por un estandarte en forma de doctrina que la llamó Justicialismo, y que la colocó sobre la cabeza de su pueblo para mostrar hoy al mundo el camino de la resurrección y de su paz.

Esta doctrina, señor presidente, cuyos capítulos están planificados, separan como un tajo el campo político, social, cultural y económico de épocas infaustas, dejando después de diez años, allá lejos, la historia desdibujada y descolorida de un pasado brumoso de abandono, de despreocupación, de indiferencia, sometimiento y vasallaje.

Cuando el barco navegaba sin ruta y sin destino, todos fuimos testigos, señor presidente, de las épocas en que el trabajo doblegaba prematuramente las espaldas de los obreros argentinos, cuando el país estaba sin organización, sin objetivos, sin fuerzas económicas y sin fuerza de trabajo, con un gobierno desorganizado, donde no se conocían cuáles eran ni las más elementales aspiraciones populares, donde la fraternidad argentina era hecha en la taberna y el abrazo era dado al calor del vicio; cuando la solidaridad social era una fantasía, con gobierno sin organización de estados y de pueblos, sin objetivos, sin una conciencia de los valores sociales y espirituales, es decir, sin una conciencia de la cultura que perfilara la personalidad del conjunto; todos fuimos testigos de las épocas del fraude y de la violencia, de las épocas en que la voluntad del pueblo estaba subordinada a las tradiciones de sangre, de dinero, disminuidos en esencia los atributos de la personalidad humana, desvalorizado el espíritu, subordinadas las masas, en fin, señor presidente, de la época en que el alma nacional estaba adormecida, parecíamos como el barco sin rumbo y sin destino.

Y después, señor presidente, cuando aquel coronel hecho pedazos, inicia la concepción de su programa, que aspira a la armonía suprema de la comunidad, sin predominio ni de la materia ni de la fantasía, lograda por la superación, por la cultura y por el equilibrio y consigue, así, la organización de un gobierno, luego la organización de un pueblo y de una nación que hoy marchan seguros y decididos en pos de objetivos sagrados para lograr la justicia social, la libertad económica y la soberanía política.

Todos esos objetivos han sido logrados mediante la acción coordinada de pueblo y gobierno, organizados con planes de acción integrales y parciales; y así, paso a paso, sin detenerse jamás, se ha logrado enastar en el corazón argentino las tres banderas que flamean en los capítulos de la doctrina nacional. Y de esta forma, todo ha sido superado, la organización racionalizada ha empezado a dar sus frutos y por Perón el alma nacional se vistió con un ropaje de nuevas emociones, el pueblo recuperó su fe,

el barco entró en su ruta y buscó su destino y con firme decisión encontró el camino de su libertad y de su felicidad, y hoy los campos, los cerros, las fábricas y las ciudades cantan por Perón el himno al trabajo que redime y ennoblece, y la patria se agrandó y se dignificó y se hizo soberana y todo este progreso que alcanzó la sociedad y que seguirá alcanzando en adelante, porque esta superación nos hará valorar en el sentido de la responsabilidad, la significación trascendente de los términos de soberanía, justicia e independencia. Esa cultura, señor presidente, que puja por exteriorizarse en las distintas manifestaciones del espíritu argentino, también está planificada para la realización en su plenitud.

El segundo plan lo expresa explícitamente al contemplar la cultura general. El tema que hoy ocupa esta sesión, es referente a uno de los aspectos de la cultura, a la cultura universitaria amoldada a los objetivos del segundo Plan Quinquenal.

Cábeme el honor de informar en general el capítulo relacionado con la misión de organización de las universidades en la ley que hoy consideramos. El artículo 1º expresa, acorde con los objetivos del segundo Plan Quinquenal, que la universidad debe tener una misión de formación humanista y de solidaridad social. Trasciende de su contenido la tendencia a la exaltación de los valores del espíritu, en contraposición con los valores materialistas. El sentido de la solidaridad social, que es una de las banderas de la nueva Argentina y ha sido el pilar de la organización definitiva, es algo así como el reencuentro de los argentinos con los argentinos, de los hermanos con los hermanos, es un despertar de la sensibilidad, es el sentimiento subjetivo del cariño hacia los nacidos bajo el mismo techo, es la confirmación bíblica del «amaos los unos a los otros», es como si la patria se eslabonara en el abrazo de cada uno de sus hijos, es el amor hecho bandera y hecho suelo. Todo esto, señor presidente, es lo que vive el pueblo argentino y debe tener su continuidad en los claustros universitarios, porque la enseñanza que no contempla las características propias y fundamentales, no es una enseñanza que esté bien orientada, es peligrosa y negativa. Como la solidaridad social es ya una realidad que da fisonomía a la organización social argentina, es necesario que en esa conciencia y en ese molde se formen definitivamente nuestros futuros profesionales. De esta forma, no los tendremos salidos de los claustros universitarios con las cabezas pesadas de conocimientos y con el corazón vacío de emociones.

No nos olvidemos, señor presidente, que estamos tratando la formación de la juventud en la escuela para la vida en el cultivo de la ciencia, pero no de las ciencias frías del saber por saber, sino del saber para ser útil a la sociedad. Es necesario que el estudiante argentino vaya teniendo conciencia de su responsabilidad so-

cial, de la deuda que debe pagar al salir ya diplomado, pues el Estado le ha proporcionado los medios para lograr su aspiración, y él ha de pagar como profesional actuando con un sentido de solidaridad social, siendo útil a los demás. Poner su ciencia al servicio del pueblo.

Los sabios son negativos cuando en sus conciencias sólo atesoran el saber sin haberlo usado jamás para evitar una lágrima a sus semejantes. La ciencia, para llamarse tal, debe tener una función social.

Otro título de fundamental importancia es el relativo a la misión de la universidad en el sentido de la reafirmación de la conciencia nacional. He hecho, señor presidente, al iniciar mi exposición, un bosquejo sintético de la situación del pasado y del presente. De la época anterior a Perón y de nuestra época. Allí está mi fundamento. La doctrina nacional no es ya un partido político. Perón ha dejado de ser ya un hombre, para ser una doctrina; enastó definitivamente la bandera augusta de la soberanía, consolidó la justicia social, la libertad económica...

Con su doctrina, el pueblo alcanzó definitivamente su felicidad, se dignificó al hombre, se formó una conciencia nacional argentina y el pueblo, en amplia mayoría, dió su pronunciamiento y es hoy ese mismo pueblo el que exige que sus hijos se formen en las universidades, compenetrados en la doctrina nacional, porque tienen conciencia de que fueron sus objetivos los que elevaron a la Nación a la cúspide de sus aspiraciones. Entre otras innovaciones de importancia, cabe señalar la investigación científica, la creación y el sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones de carácter científico, literarias y artísticas.

Propicia la nueva ley la creación de cuerpos de docentes altamente especializados y consagrados a la enseñanza. Queremos que en nuestra época los estudiantes tengan conciencia del saber y sean formados por profesores que sean honor de la cultura argentina para desterrar así, definitivamente, a aquellos que muchas veces usaron los claustros universitarios para sembrar las conciencias de sus educandos de ideas enfermizas que desorientan, confunden y corrompen.

Para finalizar mi modesta exposición, levanto mi voz provinciana y hago un homenaje de profundo reconocimiento a una disposición que sólo con Perón pudimos lograrla. Me refiero, señor presidente, a la gratuidad de la enseñanza. Con ella desaparecerá para siempre un privilegio sectario de que la universidad era para quienes la podían pagar. Yo he visto con profundo dolor las caras tristes de los changos pobres que tantas veces soñaron en su almohada de pueblo y volaron con su imaginación hacia los claustros a los que nunca llegaron porque sus padres eran obreros y la universidad había que pagarla.

¿Cómo no agradecer, señor presidente, en nombre de la juventud de mi patria, que ha recuperado la fe y que hoy llega a los claustros universitarios levantando la frente y sintiendo interiormente el orgullo de ser hijos de un obrero argentino y de tener un presidente como Perón? (Aplausos.)

Señor presidente: nunca será redundancia decirlo, porque es necesario repetir, para que vaya quedando hasta en los ladrillos de este recinto, cuyas paredes harán de yunque para que guarden el eco del golpe del martillo, con que fustigamos siempre a los que nos ultrajaron, que veneramos las figuras de Perón y Eva Perón, porque con ellas amaneció la patria. (Aplausos en las bancas y en las galerías.)

Sr. Iturbe. — Pido la palabra.

Señor presidente: mi distinguida colega por la Capital, presidenta de la Comisión de Educación, señora Calviño de Gómez, ha informado en general el despacho de las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda.

Me toca a mí hacerlo en particular. Pero antes considero conveniente formular una aclaración de carácter general.

Si bien en el despacho que ha producido la comisión, por su artículo 72 se deroga explícitamente la actual ley 13.031, en lugar de derogarse solamente las disposiciones que le sean incompatibles, como lo establecía el proyecto del Poder Ejecutivo, quiero aclarar —decía— que dicha modificación se ha hecho no porque se derogue totalmente la ley 13.031 sino porque se ha entendido que, por razones de técnica legislativa, era más conveniente reproducir distintos artículos de dicha ley que hubieran debido quedar subsistentes, prestándose con la redacción dada, a posibles diferencias de interpretación que restarían claridad al texto legal.

Dejo así sentado con estas palabras que no se trata de una derogación de la ley 13.031 sino de una modificación para adecuar su contenido, como lo señala el mensaje del Poder Ejecutivo, a lo establecido por la nueva Constitución justicialista de 1949 y por el segundo Plan Quinquenal en materia de educación.

Entraré al análisis en particular estableciendo un paralelo entre las disposiciones de la actual ley 13.031 y las contenidas en el nuevo proyecto de ley, y asimismo, con las modificaciones incorporadas por las comisiones de Educación y de Presupuesto y Hacienda, refiriéndome, como es lógico, in extenso, a las modificaciones de la ley 13.031 por considerar obvio hacerlo con aquellas que son simples repeticiones de las disposiciones contenidas en la actual ley y cuyos fundamentos están debidamente consignados en las opiniones que en oportunidad de tratarse la ley 13.031 se produjeron al respecto.

Las modificaciones que introduce el artículo primero del proyecto del Poder Ejecutivo con

relación a las disposiciones análogas de los artículos primero y segundo de la ley 13.031, actualmente en vigencia, obedecen fundamentalmente a la necesidad de adecuar más explícitamente el texto a las disposiciones de la Constitución Nacional y del Plan Quinquenal.

Mi distinguido colega por Catamarca señor Angulo, acaba de referirse, en general, a dicho artículo. Por ello me voy a concretar a hacerlo únicamente respecto a las modificaciones específicas que se introducen.

La Constitución Nacional, en el artículo 37, sección IV, apartado 4, dispone: «El Estado encomienda a las universidades la enseñanza en el grado superior, que prepare a la juventud para el cultivo de las ciencias al servicio de los fines espirituales y del engrandecimiento de la Nación y para el ejercicio de las profesiones y de las artes técnicas en función del bien de la colectividad. Las universidades tienen el derecho de gobernarse con autonomía, dentro de los límites establecidos por una ley especial que reglamentará su organización y funcionamiento.»

Y continúa: «Una ley dividirá el territorio nacional en regiones universitarias, dentro de cada una de las cuales ejercerá sus funciones la respectiva universidad. Cada una de las universidades, además de organizar los conocimientos universales cuya enseñanza le incumbe, tenderá a profundizar el estudio de la literatura, historia y folklore de su zona de influencia cultural, así como a promover las artes técnicas y las ciencias aplicadas, con vistas a la explotación de las riquezas y al incremento de las actividades económicas regionales.»

Termina diciendo: «Las universidades establecerán cursos obligatorios y comunes destinados a los estudiantes de todas las facultades para su formación política, con el propósito de que cada alumno conozca la esencia de lo argentino, la realidad espiritual, económica, social y política de su país, la evolución y la misión histórica de la República Argentina, y para que adquiera conciencia de la responsabilidad que debe asumir en la empresa de lograr y afianzar los fines reconocidos y fijados en esta Constitución.»

La adecuación de estos principios fundamentales es la que hace a la redacción que se ha dado al correspondiente artículo 1º, que en su inciso 1º establece que es objetivo de la universidad «la enseñanza en el grado superior y el desarrollo de la cultura y la afirmación de la conciencia nacional, de acuerdo con la orientación fijada por la Constitución», a la que acabo de dar lectura.

En su artículo 2º dice: «La integral formación humana de sus docentes y estudiantes, con preferencia a toda especialización técnica e inculcándoles la noción de su responsabilidad so-

cial y la conciencia de que han de servir al pueblo.» Con esta redacción se cumple con lo postulado en el segundo Plan Quinquenal en el objetivo fundamental en materia de educación, que establece que el objetivo fundamental de la Nación será realizar la formación física, moral e intelectual del pueblo sobre la base de los principios fundamentales de la doctrina nacional peronista que tienen como finalidad suprema alcanzar la felicidad del pueblo y la grandeza de la Nación mediante la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, y asimismo con lo preceptuado en el objetivo general Nº 8, que expresa: «La enseñanza superior en las universidades, sin perjuicio del cumplimiento de las bases generales expuestas en el objetivo IV, G. 1 habrá de ser realizada conforme a las siguientes bases particulares: formar profesionales que posean exacto sentido de la responsabilidad social y plena conciencia de que están obligados a servir al pueblo toda vez que la formación individual superior se logra por el esfuerzo personal del interesado y la colaboración general (económica, social y política) de la comunidad; que la docencia en la enseñanza universitaria será altamente especializada, asegurándose su formación más adecuada, y el Estado auspicia la consagración total de los docentes universitarios al ejercicio de la misma cuando así convenga, según el carácter de la función docente.»

En el inciso 3º se establece la organización de la investigación científica, la creación y sostenimiento de institutos de perfeccionamiento o de especialización y el fomento de publicaciones y actividades científicas, literarias y artísticas, concordante ello con lo dispuesto en el inciso b) del objetivo general Nº 8 del segundo Plan Quinquenal.

Asimismo, en el inciso 5º se establece el otorgamiento de los títulos para el ejercicio de las profesiones liberales y la reglamentación de su habilitación, reválida y reconocimiento, todo ello con carácter exclusivo.

En este inciso la comisión ha agregado: «o diplomas». Este agregado se efectúa en todos los artículos correspondientes del proyecto de ley, teniendo en cuenta que en algunos se hacía referencia a títulos y en otros a diplomas. Con esta redacción se evita cualquier inconveniente de interpretación que pudiera existir al respecto.

El inciso 6º establece como objetivo de las universidades la promoción de las relaciones culturales con las entidades similares de los demás países, en concordancia con lo dispuesto en el inciso g) del objetivo general número 8 del segundo Plan Quinquenal que dice que las universidades establecerán de modo permanente vinculación con los centros similares del mundo

a fin de mantener el nivel de la enseñanza universitaria argentina a tono con el desenvolvimiento general, y al mismo tiempo, proyectar la acción cultural con un aporte del progreso universal.

En el inciso 7º se establece: asegurar la gratuidad de los estudios de acuerdo con el inciso b) del objetivo general número 8 que dice que la enseñanza debe ser gratuita, eminentemente práctica y especializada, y complementada mediante una intensa tarea de investigación científica que auspicie el desarrollo de las vocaciones individuales y promueva el progreso general técnico.

En el inciso 8º se dice: interesarse por los problemas nacionales. En el 9º se establece: prestar a los organismos del gobierno el asesoramiento que les fuere requerido, también en concordancia con el inciso h) del objetivo general número 8 del segundo Plan Quinquenal. En el inciso 10 se expresa: instituir cursos de extensión universitaria y favorecer toda forma de difusión de la cultura, concordante con el inciso f) del objetivo general número 8 del segundo Plan Quinquenal y, por último, en el inciso 11, organizar sus servicios asistenciales.

De tal manera que el artículo 1º, al definir cómo deben cumplir su misión las universidades con un sentido eminentemente humanista y de solidaridad social, contemplará los objetivos que he analizado precedentemente. Con ello se cumple con las disposiciones de la nueva Constitución y con lo estipulado en el segundo Plan Quinquenal en materia de educación.

El artículo 2º del proyecto del Poder Ejecutivo expresa: «Todos los planes de enseñanza comprenderán, además de sus materias específicas, curso dedicados a la cultura filosófica, al conocimiento de la doctrina nacional y a la formación política ordenada por la Constitución.»

Este artículo, que es nuevo con relación a la ley 13.031, tiende, también, como se desprende de la lectura de su texto, a poner en vigor las disposiciones de la nueva Constitución y el objetivo fundamental del Plan Quinquenal en materia de educación.

El artículo 3º del proyecto de ley del Poder Ejecutivo prohibía usar la expresión universidad o sus derivados a cualquier institución pública o privada, así como en los títulos que expidan, salvo ley especial. Este artículo ha sido modificado, con la conformidad de los señores ministros, adoptándose el siguiente texto: «Ninguna institución pública o privada podrá otorgar, sin ley especial que la autorice, títulos, grados u honores que puedan ser confundidos con los universitarios.» Se ha entendido que la finalidad que buscaba el artículo era que fuera facultad exclusiva de las universidades el otorgamiento de títulos, de grados o de honores, pero que hay instituciones que llevan, en-

tre otros, el nombre de universidad, y que con la modificación podrán mantenerlo.

El artículo 49, que es también nuevo con relación a la actual ley 13.031, establece lo siguiente: «El territorio nacional se dividirá en regiones universitarias, dentro de las cuales ejercerán jurisdicción la respectiva universidad. Corresponde a cada una de ellas organizar, dentro de su zona de influencia, los estudios regionales y promover las artes técnicas y aplicadas, con vistas a la explotación de sus riquezas y al incremento de las actividades económicas locales.» Este artículo, como he dicho, es también nuevo con relación al texto de la ley 13.031. De su lectura se desprende, también, que sigue lo dispuesto por la Constitución Nacional en el artículo 37, sección cuarta, apartado cuarto, del que he dado lectura al iniciar esta exposición, así como a lo dispuesto en el segundo Plan Quinquenal en el capítulo cuarto, objetivo especial número doce, que dispone que, en materia de legislación para el quinquenio 1953/1957, se deberán determinar las regiones universitarias y de ubicación de los centros de estudio e investigación, teniendo en cuenta los caracteres de la región, la idiosincrasia de la población, y las necesidades mediatas e inmediatas.

La inclusión de este artículo responde, por lo tanto, al concepto de adecuar el texto de la ley a las disposiciones de la Constitución y a los objetivos del segundo Plan Quinquenal.

El artículo 59 se mantiene como ha venido enviado en el proyecto del Poder Ejecutivo, y define el mismo que integran las universidades: primero, las facultades y escuelas, con los organismos que establezca su reglamentación; segundo, los establecimientos que funcionan actualmente dentro de la jurisdicción universitaria, y los que se incorporen posteriormente bajo la misma dependencia; tercero, los establecimientos privados, municipales, provinciales o nacionales, que fueran puestos bajo la jurisdicción universitaria por la autoridad competente.

Dicho artículo es prácticamente igual a la disposición actual del artículo 59 de la ley 13.031.

El artículo 69 del proyecto del Poder Ejecutivo establece que las universidades cuentan con autonomía docente y científica, y gozan de la autarquía que, en el orden administrativo, les confiere la presente ley. Con ello se respeta el principio de autonomía establecido por la Constitución Nacional dentro de los límites que, de acuerdo a la misma Constitución, establece la presente ley, y a los cuales me referiré, en particular, al entrar a considerar los artículos pertinentes. Esta disposición es análoga a la que existía en el artículo 19, segunda parte, de la ley 13.031, que por su importancia se la ha considerado ahora en un artículo por separado.

El artículo 79 se lo mantiene igual al actual 39 de la ley 13.031.

Asimismo, el artículo 89 sobre el gobierno de las universidades, el proyecto del Poder Ejecutivo, es prácticamente análogo al artículo 99 de la actual ley 13.031.

El artículo 99, sobre el rector, corresponde al 10 de la ley 13.031. El artículo 10, que establecía las condiciones para ser designado rector, de acuerdo al proyecto del Poder Ejecutivo, era el siguiente: «Para ser rector se requiere ser ciudadano argentino y profesor titular o adjunto confirmado, o bien diplomado universitario, y treinta años de edad.» Dicho artículo modifica el artículo 11 de la actual ley 13.031. Además de ello, la comisión ha agregado a la condición para ser rector de ser ciudadano argentino el que sea nativo. Interpreta la comisión que quien va a dirigir la enseñanza en el grado superior con todas las facultades, la importancia y la significación que para la educación y cultura argentinas tienen, de acuerdo a lo establecido por la propia Constitución, debe ser un ciudadano argentino nativo. Igual disposición se adopta con relación a las condiciones para ser decano de las facultades.

El artículo 11, que fija las atribuciones del rector, se mantiene prácticamente igual al actual artículo 12 de la ley 13.031. Se ha modificado el orden de sus incisos, y la única variante que ha establecido la comisión está en el inciso 99 de dicho artículo 11 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo. Este decía: «99 Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnicoprofesional, proponer al Poder Ejecutivo para su confirmación el personal administrativo que hubiera nombrado.» La redacción que proponen las comisiones sería la siguiente: «99 Remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnicoprofesional de cada cátedra.» Entendemos, señor presidente, al proponer esta modificación, que debemos definir el concepto de autonomía que la Constitución da a las universidades y que, como lo expresa el respectivo artículo de la Constitución, del que ya he dado lectura inicialmente, la autonomía estará condicionada a las limitaciones de la ley que se dicte al respecto. Sostienen las comisiones que la autonomía universitaria es todo lo que se refiere al ejercicio de la docencia y todo lo vinculado a la cátedra. En cambio, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 83, inciso 10, de la Constitución Nacional, el presidente de la Nación tiene, entre otras, las atribuciones de nombrar a los empleados de la administración cuyo nombramiento no está reglado de otra manera por la misma.

Entendemos que los cargos meramente administrativos que no están vinculados a la docencia ni a la cátedra son, de acuerdo con la disposición constitucional, facultad privativa del Poder Ejecutivo. Por ello se suprime el segundo párrafo del inciso 99 y se mantiene, en cambio, la plena autonomía para designar y remover al

personal docente y auxiliar de la docencia y al técnico profesional de cada cátedra.

Análoga modificación se ha introducido en las atribuciones que corresponden a los decanos de cada facultad, de tal manera que resultan concordantes la redacción de esta disposición relativa al rector con la referente al decano. El rector, para los establecimientos que directamente dependen de él, y el decano, para su facultad, tienen la atribución de designar y remover personal docente, auxiliar de la docencia y técnico profesional de cada cátedra. Con ello está plenamente respetada la autonomía universitaria, dentro del concepto de autonomía que la ley fija y en cumplimiento de las disposiciones que acabo de mencionar de la Constitución Nacional.

El artículo 12 del proyecto del Poder Ejecutivo es análogo al artículo 13 de la actual ley 13.031. El artículo 13 modifica el 16 de la ley actual y establece que el vicerrector ejercerá las funciones del rector: «a) En caso de ausencia o impedimento; b) Cuando por cualquier causa el cargo quedara vacante; c) Cuando le fueren delegadas. Para el caso de ausencia o impedimento del rector y vicerrector, o de vacancia, se hará cargo del rectorado el consejero de mayor edad, quien deberá dar cuenta de ello al Poder Ejecutivo.»

Los artículos 14 y 15, que se refieren al Consejo Universitario, son: el primero igual al actual artículo 17 de la ley 13.031, y el segundo prácticamente igual a las disposiciones del artículo 18, salvo dos incisos, a los que a continuación me refiero en particular.

El inciso 49, que es nuevo, y da al Consejo Universitario la atribución de resolver la intervención de las facultades, cuando su funcionamiento no se ajuste a la presente ley; y el inciso 69, que se modifica de la siguiente manera: El proyecto del Poder Ejecutivo decía: «revalidar, habilitar y reconocer los diplomas expedidos por universidades extranjeras, de acuerdo con las leyes y con los tratados internacionales, previo estudio, en cada caso, de la jerarquía de la enseñanza impartida por las mismas». Como dije precedentemente al hablar de la utilización de la palabra «título» o «diploma», se agrega «título» para estar en consonancia con los demás artículos. Luego, la comisión propone agregar que «será condición indispensable para el ejercicio de las actividades profesionales el cumplimiento de lo establecido en el párrafo precedente», es decir, que no se podrá ejercer ninguna actividad profesional si el título no ha sido revalidado, habilitado o reconocido en su oportunidad por la universidad.

Con esta manera se evita lo que algunas veces ha ocurrido de que, en virtud de otras disposiciones, personas sin título revalidado o habilitado pudieran ejercer su profesión. De acuerdo a la modificación que propone la comisión, en adelante será condición indispensable para

el ejercicio de las actividades profesionales el cumplimiento de esta disposición.

El inciso 79 es igual al 99 de la ley actual y el 89 igual al 11. Unicamente en el inciso 14 ha introducido la comisión otra modificación.

El inciso 14 fija como atribución del Consejo Universitario, de acuerdo con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, «aprobar el presupuesto general de la universidad, y tomar conocimiento de la inversión de los fondos asignados a la misma». Se antepone a la palabra «presupuesto general» la palabra «proyecto», porque de acuerdo con las disposiciones constitucionales corresponde al Poder Ejecutivo el envío del proyecto de presupuesto y al Congreso de la Nación el aprobarlo. Por lo tanto no puede ser facultad del Consejo Universitario aprobar el presupuesto, sino el proyecto que el Poder Ejecutivo elevará oportunamente al Congreso de la Nación.

En el capítulo III, «Del gobierno de las facultades», el artículo 16 establece: «El gobierno de cada facultad será ejercido por un decano y un consejo directivo, los que durarán tres años en sus funciones.»

El artículo 17, que es nuevo y no existía en la ley 13.031, establece que «cuando el cargo de decano quedare vacante, el nuevo decano será designado por el tiempo que faltare para completar el periodo». Tiende, simplemente, a mantener uniformidad en los periodos de ejercicio del cargo por los decanos.

El artículo 18, sobre integración del consejo directivo, se mantiene igual al actual artículo 25.

Los artículos 19 y 20 son también correspondientes a los actuales artículos de la ley 13.031.

El artículo 21 del proyecto del Poder Ejecutivo es nuevo. Establece que el decano será designado por el rector. En caso de que el nombramiento del decano recaiga en uno de los consejeros, el consejo directivo será integrado por el consejero sustituto que corresponda a la categoría del profesor designado decano. Modifica ello las disposiciones actuales de la ley, en el sentido de dejar al rector el nombramiento de los decanos de cada facultad. El decano tiene la misión de dirigir cada facultad y en una universidad orgánicamente estructurada, es lógico que el rector sea quien designe los decanos, que son los que van a tener a su cargo la conducción de cada una de las facultades que pertenecen a la misma universidad, para que esa conducción tenga una sola y misma línea de acción en lo general, sin perjuicio de las prerrogativas que se mantienen privativas para cada una de las facultades en sí.

Los artículos 22 y 23 son análogos a los números 28 y 29 de la ley actual.

El artículo 24 establece que las sesiones del consejo directivo se realizarán con el quórum de 7 consejeros. Modifica el actual artículo 30 de la ley 13.031.

El artículo 25 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo fija las atribuciones del consejo di-

rectivo. En general es análogo al artículo 32 de la actual ley 13.031. Unicamente se modifican los incisos 3º y 4º con relación a la redacción actual. El inciso 3º establece: «Proponer al consejo universitario la adopción de la estructura departamental en el orden docente de la facultad.» Y el inciso 4º: «Proponer al Consejo Universitario la creación, modificación o supresión de escuelas, como también la proporción en que estarán representadas en el consejo directivo y la creación de institutos o cursos de investigación y para graduados.»

Con esta modificación se busca que sea el consejo universitario, a propuesta del consejo directivo, el que fije la adopción de la estructura departamental en el orden docente de la facultad y la creación, modificación o supresión de escuelas. Tiende también la modificación a la misma finalidad que había mencionado anteriormente y a un mejor ordenamiento y mayor unidad de dirección en la conducción de las respectivas facultades.

El inciso 6º también se modifica con relación al 8º, que sería el análogo de la ley actual. De acuerdo con el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se establece que también es atribución del consejo directivo decidir en primera instancia las cuestiones contenciosas referentes al orden de los estudios, condiciones de ingreso, pruebas de promoción, de acuerdo con lo que reglamente en general el Consejo Universitario.

La comisión aconseja suprimir un inciso y modificar dos en el proyecto de ley elevado por el Poder Ejecutivo, siempre dentro del artículo 25. Se aconseja suprimir el inciso 8º y modificar el inciso 9º de la manera que voy a informar. La redacción del Poder Ejecutivo dice: «Eleva al rectorado de la universidad las ternas de profesores titulares y designar los profesores adjuntos y honorarios.» Y se agrega: «Y proponer al consejo universitario los profesores extraordinarios.»

En el inciso 11, que pasaría a ser 10, de acuerdo con la supresión del inciso 8º, la comisión aconseja agregar a la redacción actual, que dice: «Pedir al Poder Ejecutivo, por intermedio del rector, la separación de los titulares, o elevar sus renunciaciones. Remover a los demás profesores y decidir sobre sus renunciaciones», las palabras: «con aprobación del consejo universitario».

Dicha modificación viene a quedar congruente con las facultades que el consejo universitario posee. Si tiene facultad para aprobar los nombramientos, es lógico que deba aprobar las remociones y decidir acerca de las renunciaciones.

A continuación del artículo 25, la comisión aconseja agregar un artículo nuevo al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que llevaría el número 26. Por el mismo se incorpora el artículo 33 de la ley 13.031. Motiva la incorporación de

esta disposición las manifestaciones que hice al iniciar mi exposición, en el sentido de que el proyecto del Poder Ejecutivo se refería a la derogación de las disposiciones incompatibles con el mismo y no a la derogación de la ley.

Al adoptar la comisión el criterio de derogar la ley, dicho artículo quedaría derogado de no ser reproducido en el proyecto en consideración. Como trata de incompatibilidades de los consejeros, que hacen a la ética, entendemos que debe ser mantenido. Dice el artículo 33 de la ley 13.031, cuya inclusión se propone como artículo 26 del despacho de la comisión: «Los miembros titulares del consejo directivo no podrán desempeñar empleos rentados dependientes de la universidad, con excepción de los cargos directivos y docentes. Tampoco podrán ser nombrados para cátedras, dirección, empleo o comisión rentada creados durante su mandato, hasta después de dos años de fenecido éste. Los aspirantes a cátedras ya existentes podrán presentarse al concurso, previa renuncia, como miembros del consejo directivo.»

En el artículo 26 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 27 por la incorporación del nuevo artículo, como ya manifestara al referirme a las condiciones para ser rector, se agrega también, por análogo motivo, la disposición de que para ser decano se requiere ser ciudadano argentino nativo.

El artículo 28 del despacho es igual al artículo 36 de la ley 13.031.

El artículo 28 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 29, y se refiere a las funciones del decano, es análogo al artículo 38 de la ley 13.031, con la única modificación del inciso 7º. Dicho inciso, en el proyecto del Poder Ejecutivo, tiene una redacción análoga al inciso 9º del artículo 11, que se ocupa de las funciones del rector. El texto del inciso 7º quedaría redactado de la siguiente manera: «Designar y remover al personal docente, auxiliar de la docencia y técnicoprofesional de cada cátedra», como función del decano.

Los artículos 29 y 30 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasan a ser 30 y 31, son prácticamente iguales a los artículos 40 y 41 de la ley 13.031.

El artículo 31, que pasa a ser 32, es igual al 42 de la actual ley. El artículo 32 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 33, adopta disposiciones de los artículos 59 y 47 de la ley 13.031 con modificaciones que no analizo, por haberlo ya hecho en su exposición la señora presidenta de la Comisión de Educación.

Como fundamento de las modificaciones que se introducen en el artículo 33 y en otros para evitar en adelante repeticiones, quiero dejar establecido que las mismas no son substanciales ni de fondo, sino simples modificaciones de carácter formal que tienden a quitarle cierto carácter reglamentario que tenía la ley 13.031.

Hay algunas disposiciones en el texto de la ley que por ser de carácter reglamentario el proyecto del Poder Ejecutivo no las incluye, estimando que deben estar únicamente contenidas en la legislación las disposiciones de fondo y que las reglamentarias deben quedar libradas al correspondiente decreto.

Lo mismo el artículo 34, que pasa a ser 35, prácticamente igual a la primera parte del artículo 56, con el agregado, entre las causas de separación, de la de inconducta manifiesta.

En el artículo 36, que habla de la designación de los profesores titulares, se mantiene el artículo análogo 46 de la actual ley 13.031, con el solo agregado de que además de aptitudes técnicas tenga las «pedagógicas». Es lógico que sean tenidas en cuenta en la terna de candidatos, previo el concurso de méritos, no sólo las aptitudes técnicas, sino también las pedagógicas. Es la única modificación que introduce el proyecto de ley del Poder Ejecutivo con relación a la disposición análoga de la ley en vigencia.

El artículo 37 es igual al 54 de la ley actual; el artículo 38 es igual al 48 y el 39, análogo al 49, siempre de la ley actual.

Al artículo 40 del proyecto del Poder Ejecutivo, la comisión propone completar con «título o diploma universitario», de acuerdo a los agregados análogos hechos en los otros artículos y por los mismos fundamentos.

El artículo 41 que pasa a ser 42, corresponde, con modificaciones, a los artículos 50 y 51 de la ley actual.

El artículo 42 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 43, es nuevo con relación a la ley 13.031. Establece que «cuando se haya declarado desierto un llamado a concurso, por no haber podido integrar la terna, se procederá a un segundo llamado. En caso de repetirse la situación anterior, el Consejo Directivo deberá dictaminar sin el requisito de la terna». De la simple lectura de su articulado se desprenden los fundamentos a que obedece la incorporación de esta reforma, lo que me exime de extenderme en mayores consideraciones al respecto.

El artículo 43 introduce modificaciones de forma al análogo 53 de la ley 13.031.

El artículo 44 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 55, que define las funciones de los profesores titulares, es análogo al 57 de la ley actual, introduciéndose como modificación al proyecto ciertas disposiciones de carácter especialmente reglamentario, con el criterio general a que he hecho mención anteriormente.

El artículo 45, que se refiere a los profesores adjuntos, es análogo al 60 de la ley actual.

En el artículo 46 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 47, se establece que «cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario, el número de profesores adjuntos

que corresponda a cada cátedra. Todas las ordenanzas relativas a régimen de concursos para la designación de profesores adjuntos requerirán aprobación del Consejo Universitario».

En este artículo, señor presidente, la comisión introduce una modificación fundamental: se propone agregar, después de que «cada facultad determinará, con aprobación del Consejo Universitario el número de profesores adjuntos que corresponda a cada cátedra» las siguientes palabras: «el que no podrá exceder en total del equivalente a un promedio de dos por cargo».

Esta modificación obedece a lo siguiente: de acuerdo a las otras disposiciones sobre el aspecto remuneración a que más adelante se va a hacer mención, este proyecto contempla que todos los profesores adjuntos deben ser remunerados. De mantenerse la redacción de este artículo de la manera como venía propuesto por el Poder Ejecutivo, quedaba librado al Consejo Universitario poder nombrar profesores adjuntos de una manera ilimitada. Como los mismos van a tener retribución, es lógico que se fije una limitación en número general, pero manteniendo la atribución de que se pueda distribuir dentro de las necesidades de cada una de las facultades ese número máximo que se fija.

En una palabra, si para determinada cátedra es sólo necesario un profesor adjunto y para otra cuatro o cinco, será atribución del Consejo Universitario el efectuar la distribución de acuerdo con esa necesidad. La única limitación que se le establece es que el número máximo de profesores adjuntos que pueda nombrar en cada facultad no exceda en total de un promedio equivalente a dos por cátedra. A pesar de esta modificación, se ha contemplado en un artículo nuevo que por estar relacionado al actual me voy a referir ahora, aunque va como artículo 71 del proyecto de ley. En él, a pesar de esta disposición, se tiene en cuenta la situación que puede plantearse en algunas facultades, como ser, por ejemplo, en la de Medicina, donde el número de profesores adjuntos existentes excedería al promedio de dos por cátedra que autoriza el proyecto de ley con la redacción aconsejada por la comisión.

El artículo nuevo que se propone dice: «Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 47, los profesores adjuntos designados por el Consejo Universitario al 31 de octubre de 1953 tendrán derecho a la percepción de las remuneraciones a que se refieren los artículos 56 y 57.»

En una palabra, si actualmente alguna facultad está excedida en el número de profesores adjuntos que le daría el promedio de dos por cátedra, se mantienen los que estén designados al 31 de octubre de 1953, siendo ellos también remunerados. Debido a ello se suprime la diferencia de adjuntos y asistentes, quedando únicamente profesores adjuntos remunerados todos

que pueden ser aumentados hasta un promedio máximo de dos por cátedra y distribuidos de acuerdo con las necesidades de cada cátedra por el Consejo Universitario, contemplándose, además, por vía de excepción del artículo 71, las situaciones de hecho que pudieran existir con relación a los profesores adjuntos al 31 de octubre del corriente año.

El artículo 47 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo también es modificado por la comisión y pasa a ser 49 de su despacho. En primer lugar, me voy a referir al artículo 48, porque, de acuerdo con lo que propone la comisión, el mismo pasa a ser 47 del proyecto del Poder Ejecutivo y 48 de acuerdo con el despacho de la comisión.

El que sería artículo 49 del proyecto de despacho de la comisión, artículo 47 del Poder Ejecutivo, dice lo siguiente: «Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta lo siguiente: su comportamiento moral, haber dictado por lo menos dos cursos complementario, según la reglamentación de cada facultad, haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado. Todo ello según la reglamentación que dicte la facultad. Los profesores adjuntos que no hayan sido confirmados cesarán automáticamente en sus funciones.»

La comisión propone redactarlo de la siguiente manera: «Cumplidos cuatro años de su designación, el profesor adjunto, para seguir siéndolo, deberá ser confirmado por el Consejo Universitario, el que tendrá para ello en cuenta su comportamiento moral y docente, y haber presentado un trabajo sobre la materia, juzgado por una comisión nombrada por el consejo directivo, que se llamará tesis de profesorado.» La supresión de la parte referente a haber dictado por lo menos dos cursos complementarios, según la reglamentación de cada facultad, obedece al hecho de que, al pasar los adjuntos y los asistentes a ser todos profesores adjuntos, con las mismas obligaciones que establece el artículo 48, de hecho tienen que cumplir con la colaboración que la misma ley fija en las tareas de la cátedra, participando de la enseñanza, formando parte de las mesas examinadoras y ejerciendo las demás funciones de los profesores adjuntos. Por lo tanto, se suprime la disposición anterior, porque vendría a ser una redundancia, ya que, repito, tienen las funciones comunes de los profesores adjuntos.

En el artículo 48 se agrega, en su inciso 1º, después de las palabras «colaborar en las tareas de la cátedra», lo siguiente: «...de acuerdo con la reglamentación que dicte la facultad.»

El artículo 49, que pasa a ser 50, tiene modi-

ficaciones con relación a su análogo, el 66 de la ley en vigencia.

El artículo 50 del proyecto del Poder Ejecutivo es igual al 67 de la ley actual.

El artículo 51 del proyecto del Poder Ejecutivo es análogo, con modificaciones, al 73 de la ley actual. Dichas modificaciones son simplemente formales.

El artículo 52 del proyecto del Poder Ejecutivo, que pasa a ser 53, es igual al artículo 72 de la ley actual.

Los artículos 53 y 54 son análogos, con algunas modificaciones a las 75 y 76 de la ley en vigencia.

En el título cuarto, de las remuneraciones, los actuales artículos 68 al 71, que hablan de las retribuciones de los profesores, son condensados, en el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, únicamente en dos artículos del siguiente texto: Artículo 55 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo: «El rector y el vicerrector de las universidades, los decanos, directores de escuelas o institutos y profesores, percibirán las remuneraciones uniformes para todas las universidades argentinas que fije la ley general de presupuesto de la Nación.» Y el artículo 56 establece que: «Los profesores titulares y adjuntos y el personal diplomado auxiliar de la docencia gozarán de un aumento del 10 % en sus remuneraciones cada cinco años de ejercicio de la docencia universitaria.»

Estas modificaciones obedecen al hecho de que, en la redacción actual de la ley 13.031 se establecían, con carácter permanente, las remuneraciones de los profesores, sean titulares o adjuntos. Como el señor presidente de la Comisión de Presupuesto va a informar sobre las modificaciones de carácter económico que se establecen en el proyecto de ley, no me voy a extender en mayores consideraciones sobre estos dos artículos. Quiero, únicamente, dejar establecido que ello obedece a que, al pasar a presupuesto directamente, la ley de presupuesto anual será la encargada de fijar la remuneración que corresponda a rectores, vicerrectores, decanos y profesores titulares o adjuntos de cada facultad, sin tener, por lo tanto, el carácter fijo que tenía la disposición actual de la ley 13.031.

En el título V, que se refiere a los estudiantes, también se han condensado en dos artículos del proyecto del Poder Ejecutivo todo lo que antes abarcaban los artículos 78 a 96 de la actual ley universitaria. Los fundamentos de esto son análogos a los de carácter general que hice al referirme a los detalles de carácter reglamentario. En el proyecto de ley que viene del Poder Ejecutivo se fija como fundamental en el artículo 58 que los requisitos de admisión, categorías, promociones, concesión de becas, épocas de examen y todo lo atinente al régimen del estudiante serán reglamentados por el Consejo Nacional Universitario. Por lo tanto es la re-

glamentación de este consejo la que debe fijar las condiciones y requisitos fundamentales. Establece además que los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado de la entidad gremial reconocida. Tendrá voto sólo en aquellas cuestiones que directamente afecten a los intereses estudiantiles. Las comisiones proponen que entre las condiciones a agregar a las establecidas en el proyecto del Poder Ejecutivo figure la de ser alumno regular a uno de los tres últimos años de estudio. Por lo tanto, el artículo quedaría redactado de la siguiente manera: «Los estudiantes tendrán una representación en los consejos directivos de cada facultad por medio de un delegado alumno regular de uno de los tres últimos años de estudio y proveniente de entidad gremial reconocida. Tendrá voto solamente en aquellas cuestiones que directamente afecten los intereses estudiantiles.»

El artículo 60, sobre el Consejo Nacional Universitario, que pasa a ser 61 en el despacho de la comisión, sigue los lineamientos generales de los artículos 111 y 112 de la actual ley 13.031. Al proyecto de ley del Poder Ejecutivo, en el citado artículo, la comisión propone agregar, con el solo fin de aclarar mayormente su texto, al hablar de las funciones del Consejo Nacional Universitario en los incisos 1º al 7º, «además de las funciones que expresamente le acuerda la presente ley». Los incisos 1º al 7º establecen distintas funciones para el Consejo Nacional Universitario, pero por otros artículos de la ley también se dan otras funciones al mismo. Para que no haya un error de interpretación, se aclara que además de las específicamente mencionadas en los incisos correspondientes, ello es sin perjuicio de todas las otras que le acuerda la ley expresamente.

El título correspondiente al patrimonio y recurso de las universidades y su administración no entro a considerarlo por las razones que he dado, ya que el mismo va a ser fundado por mi distinguido colega el señor senador por Salta, presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, y únicamente me voy a referir, para terminar, a los artículos nuevos que se agregan.

El artículo 69 del proyecto de ley del Poder Ejecutivo pasa a ser artículo 72. Entre los artículos 68 y 69 del proyecto del Poder Ejecutivo se agregan dos nuevos: el artículo 70, que establece que los concursos para la provisión de cargos de profesores titulares y adjuntos, en trámite a la sanción de la presente ley, se regirán por las disposiciones de la reglamentación bajo la cual se llamó a concurso. Esta disposición, que tiene un carácter transitorio, tiende a que quede claramente establecido que si hay concursos en trámite, los mismos se rijan por las disposiciones de la época en que se llamó a concurso. Por lo tanto, la futura reglamentación

que se dicte únicamente entrará en vigor para los concursos que se abran con posterioridad a la fecha de la misma.

El artículo 71, nuevo, es aquel a que hice mención sobre la continuidad y remuneración de todos los profesores adjuntos designados al 31 de octubre. Como ya hice mención a esto, considero innecesario volver a repetirlo.

En el último artículo del proyecto del Ejecutivo, 69 —que pasa a ser 72 del despacho de la comisión—, por las razones que di inicialmente, aconseja modificar el proyecto de ley del Poder Ejecutivo, de tal manera que su texto quede así: «La presente ley entrará en vigencia el 1º de enero de 1954, quedando derogada la ley 13.031 y todas las disposiciones que le sean incompatibles. Los requisitos y procedimientos para la designación de las autoridades de las universidades y facultades, establecidos en la presente ley, no se aplicarán a las actuales autoridades, mientras ejerzan su mandato.»

Señor presidente: por las consideraciones que acabo de formular en este informe en particular, que he tenido el honor de hacer en nombre de la Comisión de Educación, solicito de mis honorables colegas el voto favorable para la sanción del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, con las modificaciones introducidas por la comisión, con el firme convencimiento de que este proyecto da a las universidades argentinas un texto legal que, en consonancia con las disposiciones de la Constitución Nacional y del segundo Plan Quinquenal, les va a permitir cumplir de la mejor manera posible con lo que quiere el general Perón: el adelanto y el progreso de la educación y de la cultura en todo nuestro país.

Nada más: *(Aplausos en las bancas y en las galerías.)*

Sra. Rodríguez Leonardi de Rosales. — Pido la palabra.

Señor presidente: representante ante esta Honorable Cámara de una provincia que tiene una definición y fisonomía predominantemente católica y universitaria, no podría dejar de hacer escuchar mi voz sobre algunos aspectos fundamentales de esta reforma legal que se realiza con el propósito de adaptar la ley 13.031 a las normas establecidas en la Constitución Nacional peronista y a las previsiones del segundo Plan Quinquenal.

En esta Argentina de Perón y de Eva Perón la concepción fundamental de la doctrina nacional justicialista define en la Constitución Nacional, como misión de la nueva universidad, la consecución, por la cultura y la ciencia, de los fines espirituales y el engrandecimiento nacional; y en los objetivos fundamentales del segundo Plan Quinquenal, que son permanentes, en el capítulo correspondiente, concreta definitivamente el sentido humanista, social y cristiano de la cultura argentina.

Por estas razones de orden constitucional y legal, y respondiendo, por otra parte, al sentido de auténtica democracia que practica el gobierno peronista, al hacer lo que el pueblo quiere y defender un solo interés, el del pueblo, que en una mayoría casi absoluta se declara cristiano y católico, como lo demuestran las cifras del IV Censo General de la Nación realizado por iniciativa del general Perón en 1947, que da un porcentaje de 93,06 % de católicos sobre la población total de la República, el sentido que han de imprimir las universidades a su misión cultural entiendo que no puede ser otro que el sentido humanista, social y cristiano.

Y aunque pueda creerse que es redundancia insistir sobre esta orientación cristiana de la cultura, pues ella se desprende de todo el contenido de la ley universitaria, es necesario dejar explícitamente sentado tal espíritu y tal orientación.

Somos nosotros, los latinoamericanos de hoy, continuadores históricos de una corriente civilizadora que se alineó desde el principio detrás del emblema de Cristo. Basta examinar, aunque sea someramente, los documentos fundamentales de la misión hispánica para advertir y reconocer que toda ella estuvo impregnada por el sentido de la Cruz. Desde las capitulaciones otorgadas a Colón por la reina Isabel hasta las últimas disposiciones de las Leyes de Indias, se mantiene inalterable el pensamiento de realizar en estas tierras nuevas los ideales redentores de la era nueva de la humanidad. Después de la obra cumplida por todos los grandes de la historia argentina, con esa convicción, nosotros, que existimos por virtud de ella, porque sin ella no habríamos aparecido a la vida de los pueblos con nuestro rasgo peculiar, no podemos pararnos sobre cinco siglos de cultura cristiana para negar la esencia de esa cultura. No cabe ninguna dignidad en el hombre cuando el hombre reniega de los grandes legados atávicos, porque una conducta tal aparece como una negación de la propia existencia.

Ahora bien; el hombre, en cuanto a ser social, no llega al mundo trayendo como legajo los exclusivos valores de su cuerpo y de su alma individuales; viene trayendo también una responsabilidad importante con respecto a los valores espirituales supremos de la sociedad en que nace. Y por mayor tiempo que haya transcurrido desde los orígenes, de ninguna manera puede renunciar a la defensa de los auténticos valores heredados cuando ellos han sido gestados y sostenidos con una noble visión de eternidad.

Todo esto lo ha comprendido, con penetrable claridad, nuestro gobierno de la revolución peronista, cuando después de dedicar largos años de una terrible lucha que tuvo por obligado escenario el campo preferentemente material

de lo económico aprovecha estos momentos de trabajo sereno y de pacificación de la República para atender, ahora con predilección, a los problemas del alma de nuestro pueblo. Y es en este momento cuando el general Perón emprende la reforma educacional.

Hemos visto a nuestro presidente auspiciar y propiciar con entusiasmo las definiciones de los congresos que se referían a esta orientación cristiana de la vida; le hemos visto inspirar las leyes fundamentales y específicas con ese mismo ánimo; le hemos visto arrodillarse ejemplarmente ante el Señor de los hombres y de las naciones, y le hemos oído pronunciar palabras de sobrecogedora humildad, pidiendo a Dios que le ilumine para cumplir en esta parte del mundo su misión de cristiano, como cuando dijo, en reciente discurso, que estaba convencido de «venir luchando por aquella justicia y por aquella caridad que Cristo pregonara hace dos mil años».

Frente al lastre ateo y temerario de largos años de liberalismo y de consecuente negación nacional e injusticia social, y ante la perspectiva de un mundo desolado por la incredulidad marxista, la tercera posición argentina tiene una definición expresa sobre el grave asunto de la defensa del acervo espiritual de la Nación.

En este florecer de espíritu que realiza el propio espíritu del genial conductor al emprender la reforma educacional basada en la bondad de los hombres hay una presencia milagrosa y la acción de una mujer cuyo nombre se ha transformado en símbolo de amor, del buen amor en la nueva Argentina.

Esa mujer era cristiana. Su verbo fué el de Cristo verdadero; su andar fué el de la siembra verdadera, el del batallar constante. Pero, por sobre todas sus acciones, aquel renuncio permanente, aquel entregarse al prójimo íntegro, totalmente, la definen discípula del Nazareno. Tanto lo fué, que se ofreció en el martirio, enseñando a los hombres cómo se puede amar a Dios amando a los hermanos.

Eva Perón vivió en la esperanza; fué la llamada de la fe y es la perenne caridad —que es amor puro—. Defensora de la tradición argentina, su voz se hacía fervor para exclamar: «Bajo la cruz hemos nacido; de Norte a Sur y de Este a Oeste, empresas guerreras, empresas políticas, empresas espirituales han sido preparadas y asentadas sobre la cruz, como cuadra en una raza templada en el ejercicio de las mejores virtudes.»

Por eso se explica su mística, su hacer constante, su reparar injusticias, ese su valor ante el sufrimiento y, por sobre todo, su amor infinito a los niños, a quienes únicamente Cristo había llamado a su regazo.

La cultura argentina tiene hoy la lumbré de su fe. Refiriéndose a ella, decía: «La religión responde a las más hondas inquietudes del alma

humana y a los más angustiosos problemas del hombre.»

Eva Perón, junto al líder y gobernante, levanta la cruz para que ella irradie su claridad inextinguible en el hasta entonces páramo de un pueblo olvidado.

Mirando la histórica senda del pasado, decía: «La formación jurídica e internacional de nuestra evolución histórica desde sus orígenes fué siempre inspirada en los principios eternos del cristianismo.»

Dolorosamente reconocía la equivocación de los gobiernos anteriores que habían olvidado la fe, y exclamaba: «Y hemos sentido que nos hemos equivocado, en cuanto hemos construido sobre el ateísmo extranjerizante, filtrado en nuestra legislación o instalado por sorpresa sobre nuestras instituciones básicas, entre ellas la de la educación.»

La legisladora que habla, totalmente solidaria con el pensamiento del general Perón y el sentir de nuestra inolvidable Jefa Espiritual de la Nación, Eva Perón, anticipa su voto favorable a este proyecto de ley que, con espíritu cristiano, quiere que las universidades argentinas cumplan su misión con sentido eminentemente humano y de solidaridad social. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Durand. — Pido la palabra.

En nombre de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Asuntos Económicos, agregaré algunos conceptos al detallado informe que acaba de dar mi distinguida colega por la Capital señora senadora Calviño de Gómez, así como también los señores senadores que le siguieron en el uso de la palabra.

Uno de los regímenes que más variaciones ha experimentado en su régimen económicofinanciero es el universitario. Y se explica, señor presidente. Desde la sanción de la primera Constitución argentina, quiso dársele a la enseñanza universitaria el régimen autónomo que le correspondía, pero, como es natural, la autonomía política sin un independiente y sólido sistema financiero no es más que un régimen transitorio.

Ahora bien; actualmente la autonomía económicofinanciera tiene un sentido completamente distinto al que se le atribuía en el siglo pasado y a principios del presente. La compleja administración del Estado moderno y las funciones de regulación, promoción, etcétera, que hoy en día se le reconocen, hacen incompatibles aquellos conceptos que surgieron al amparo de teorías liberales y los hechos van demostrando que es necesario en los tiempos actuales que el Estado mantenga dentro de su directa órbita de fiscalización todas las recaudaciones que en definitiva van a formar el fondo con que se cubren los gastos de los servicios que el mismo Estado presta a la colectividad.

Si hacemos la historia de la evolución del régimen económicofinanciero de nuestro sistema

universitario, podemos observar que cada modificación de su mecanismo ha llegado para solucionar situaciones deficitarias de los organismos que lo integran. Desgraciadamente, la modificación que contiene el proyecto de ley que nos ha enviado el Poder Ejecutivo no escapa a la regla común.

La actual ley universitaria tenía un sistema propio de financiación. Su artículo 107, establecía en cinco incisos los recursos para cubrir los gastos que ocasionara la realización de sus fines. De todos los recursos, el más importante era el que creó el inciso 2º de ese artículo, el cual disponía aplicar un impuesto del 2 por ciento que toda persona —de existencia física, ideal, con o sin personalidad jurídica, o sucesión indivisa— que empleare trabajo de otra estaba obligada a satisfacer sobre el importe anual de los sueldos y salarios que abonare. Se exceptuaban los sueldos y salarios que se pagaban al servicio doméstico y los abonados por los fiscos nacionales, provinciales y municipales y los de las entidades que en su totalidad pertenecieran a los mismos.

Este recurso no dió el resultado que de él se esperaba. En primer lugar la recaudación no llegó ni aproximadamente al monto que se había calculado; quizá pudo haber rendido más, pero su fiscalización era costosa y difícil. También surgieron inconvenientes con su aplicación, en virtud de que existía otro impuesto, basado en un mecanismo similar, que era el impuesto para aprendizaje, y, como digo, al parecerse en ambos impuestos el ámbito de aplicación, se produjeron dificultades en razón de la aparente superposición impositiva.

Otro de los recursos regulares con que contaba la ley universitaria 13.031, era los ingresos obtenidos por matrículas y otros conceptos universitarios. Si bien es cierto que su monto no era de gran significación, su regularidad, su fácil percepción y uniformidad, le atribuían condiciones de utilidad; pero este recurso quedó sin efecto ante el concepto justicialista de la doctrina que nos dió nuestro ilustre líder. Creo que aun guardan memoria mis honorables colegas del solemne momento en que el excelentísimo señor presidente de la República, interpretando el verdadero sentido justicialista de nuestra doctrina, proclamó que la enseñanza impartida por el Estado sería gratuita.

Estos inconvenientes y el déficit que iban acusando las finanzas universitarias, promovieron la sanción de la ley 13.343, de 1948, cuyo artículo 11 aumentó en tres unidades el impuesto a las ventas, con destino a la formación de un fondo para educación, afectado a dos fines: para substituir el recurso universitario de la ley 13.031 y para la atención de los gastos que originaron los regímenes de escalafonamiento del personal docente de la enseñanza primaria, media, normal, técnica y especial. Este recurso fué poste-

riormente ajustado y ordenado por la ley de presupuesto general para 1950.

Desde 1949 hasta el año en curso ha seguido funcionando regularmente este sistema de recursos universitarios, pero, precisamente, la experiencia que se ha recogido durante estos años aconsejan modificarlo, en virtud de que no es posible supeditar el desenvolvimiento regular de los organismos universitarios al resultado más o menos aleatorio de las transacciones comerciales. Es evidente que la actividad universitaria de nuestro país ha experimentado en estos últimos años un significativo incremento; en casi todas las casas de altos estudios se ha multiplicado el número de estudiantes inscritos, lo que ha obligado a aumentar su personal docente, auxiliar y administrativo; simultáneamente los gastos para atender la enseñanza han debido elevarse.

Para dar una idea de la situación actual daré algunas cifras. Cuando se instituyó en 1949 el recurso de la ley 13.343, las universidades sólo pudieron hacer efectivo su cobro durante tres trimestres, en virtud del sistema establecido en la ley de contabilidad de cierre al 31 de diciembre; esto trajo como consecuencia que en el año 1950 las universidades iniciaran ese ejercicio con una deuda de 92.000.000 de pesos, que el Poder Ejecutivo anticipó a cuenta de las recaudaciones de ese impuesto en los ejercicios futuros. Esta deuda sólo ha podido cancelarse en parte, y en la actualidad las universidades sólo han reintegrado 49.000.000 de pesos. Para el año en curso, teniendo en cuenta que los gastos de las universidades ascenderán a la suma de 381.000.000 de pesos y se calcula recaudar por el impuesto específico sólo 296.000.000 de pesos, a los cuales habrá que agregarle un sobrante de más de 30.000.000 del ejercicio anterior, se presume un probable déficit de 56.000.000 de pesos aproximadamente.

Además, las universidades tienen actualmente deudas contraídas con terceros por provisión de bienes y servicios, por un monto aproximado de 60.000.000 de pesos. Estas deudas son el resultado del aumento vegetativo de todas las actividades de la enseñanza frente a la rigidez de los recursos con que cuenta.

De ahí que podrá observarse, en el artículo 63 del proyecto del Poder Ejecutivo, que en el despacho pasa a ser el 64, una autorización para disponer la cancelación de las deudas que al 31 de diciembre del año en curso no haya podido atender cada universidad con los recursos con que hubiera contado, inclusive los anticipos del Tesoro a que me he referido hace un instante. Estos gastos serán atendidos con los recursos que la ley 13.654 le acuerda al Poder Ejecutivo, para la cancelación de gastos impagos de ejercicios vencidos.

Las razones y los hechos que he expuesto demuestran, con la elocuencia de las cifras, que

es aconsejable modificar el sistema de los recursos con que cuentan las universidades argentinas.

De acuerdo con el texto del proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, y que las comisiones aconsejan aprobar con algunas modificaciones, las universidades contarán con las contribuciones de rentas generales que anualmente fije el presupuesto general de la Nación. Para compensar estas contribuciones que rentas generales hace a las universidades, los recursos que se recaudan en virtud de las disposiciones que he mencionado hace un momento, y que están afectados al fondo universitario, ingresarán a rentas generales. De esta manera, los organismos encargados de la enseñanza superior contarán con todos los recursos necesarios para su normal desenvolvimiento, sin tener que depender, como lo he dicho, del resultado particular de la recaudación de un impuesto.

Más aún: en la nueva ley se contempla la situación de docentes que por insuficiencia de recursos no habían podido ser debidamente remunerados.

El proyecto que las comisiones aconsejan aprobar no ha sido modificado en nada en cuanto a su régimen administrativo. En este sentido se mantienen las cláusulas de la ley 13.031 o se reajustan de acuerdo a las leyes orgánicas en vigor. Sólo se ha modificado su régimen económico-financiero para subsanar las dificultades que impedían su normal desenvolvimiento. (*Muy bien! Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Ruiz Villasuso. — Pido la palabra.

Señor presidente: con íntima emoción de argentino, de universitario y senador de la Nación, quisiera hacer oír mi voz en este momento en que se trata el proyecto de ley universitaria.

Vienen desde las lejanías de mi juventud, recuerdos imborrables que ahora evoco al conjuro de una vocación sin vacilaciones; ellos han de ser el escudo de armas que blasone mis argumentos y que refirman mis convicciones.

Pero es menester preguntar qué es la universidad. La universidad es un núcleo de irradiación cultural, de conformación intelectual, y por eso mismo constituye un problema de educación. No es ésta la oportunidad propicia para hacer su historia, porque nació en el medioevo con claridad filosófica, formó en su seno a los humanistas y otorgó a sus egresados el título máximo del doctorado.

De la escuela politécnica a la universidad, media una distancia que va de lo meramente técnico a las altas expresiones de la cultura. Y así insistimos: centro de irradiación cultural, es como la concibe la Constitución que nos rige, la doctrina nacional que nos la impone y el segundo Plan Quinquenal que así la comprende.

No fué ésa la universidad a que llegamos alentados por una vocación en ciernes, y por

eso mismo, por la nostalgia que aun sentimos, y por la fe que ahora tenemos en la realización de la nueva Argentina, al mágico conjuro de la conducción constructiva de Perón, es que deseamos que la universidad vaya por el camino de su reencuentro, que ya en gran parte lo hemos logrado por la ley 13.031.

Si evocamos la historia universitaria, nos encontramos con que, en el año 1918, estalla un movimiento llamado «reforma universitaria», que luego, legalizado por el estatuto de 1923, comprobamos que el mismo profesorado y los mismos estudiantes desvirtúan este concepto de los principios humanistas que llevaba esta reforma. Nació con ella una clase profesional de políticos universitarios, y nos encontramos que reina, en ese momento, la prebenda universitaria.

Posteriormente, logramos el estatuto del año 1931 y 1932, donde son eliminados los estudiantes del comando universitario, de la participación en el gobierno de la universidad, pero que crea una casta o grupo de universitarios políticos, que no tenían otro objetivo que satisfacer sus apetitos o las conveniencias del grupo.

Entendemos que, con la actual ley universitaria, entregándole el gobierno de las altas casas de estudio a sus profesores, desde el rector al decano, se le otorga la autonomía que impone la Constitución. Si el rector es designado por el Poder Ejecutivo, se logra una identificación de ideas en el plano superior de las realizaciones con un fin patriótico. Y si el rector nombra a los decanos, no es más que para tener formado un equipo que refuerce la unidad de comando y de doctrina; porque autonomía no es un concepto de independencia o de libertad absoluta, lo cual puede significar un desmembramiento absurdo de la doctrina y de la unidad nacional. Lo que se busca, es una unidad de pensamiento, de acción, y además una compenetración entre el Poder Ejecutivo, que está concorde con la doctrina nacional y el pensamiento y la acción del rectorado.

Dentro de las modificaciones se obtiene la dedicación integral en materia de disciplina para que se forme una escuela y para que se logre la suprema aspiración de transformar profesores en maestros. Las leyes no son inmutables, y ya han de venir tiempos en que esto no sea necesario. Entonces se podrá reformar la ley volviéndola a adaptar a nuevas circunstancias.

También proponemos la representación estudiantil. En esta época de Perón, en que se ha hecho carne y razón de ser la dignificación humana en todos sus aspectos, esta medida tiende a dar jerarquía a los valores de cada generación estudiantil.

El sentarse —investido de la representación de todos sus compañeros— ante la mesa magna desde donde se rigen los destinos de una casa

de estudios de la universidad nacional, debe ser un timbre de honor y un galardón más en la carrera de un universitario. Confiamos, pues, esta dignidad a quien por sus condiciones de hombría de bien y de intelecto demostradas en una carrera que pueda ser ejemplo para sus condiscípulos, sepa hacer honor a su condición de universitario argentino.

Creemos, sin sombra de sospechas, que hemos de lograr una mayor dignificación de la universidad argentina, no alejada de las inquietudes de la patria, pero sí en la que se haya desterrado la política bastarda de las ambiciones personales, de los bajos apetitos, y que eduque y enseñe con dignidad, que investigue con ahínco para bien de las generaciones futuras y gloria de la patria, para que sea, como lo quiere nuestro líder, una universidad señora y señera, para que sea, en fin, lo que debe ser, porque si no, no será nada. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

Sr. Presidente (Teisairé). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general el despacho de las comisiones.

—Se vota y resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Teisairé). — En consideración en particular.

Sr. De Paolis. — Pido la palabra.

Dado lo exhaustivo de los informes pronunciados en la sesión de la fecha, y atendiendo a que las señoras y señores senadores tienen sobre sus bancas el despacho de las comisiones, hago indicación para que en la votación en particular se omita la lectura de los artículos, dándose por aprobados los que no se observen.

—Asentimiento.

Sr. Presidente (Teisairé). — Habiendo asentimiento, así se hará.

—Se vota en particular y aprueba, en el siguiente orden:

Artículo 1º con la modificación del inciso 5º propuesto por el despacho; artículo 2º; artículo 3º propuesto por el despacho; artículos 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º; artículo 10 propuesto por el despacho; artículo 11 con la modificación del inciso 9º propuesta por el despacho; artículos 12, 13, 14; artículo 15 con las modificaciones de los incisos 6º y 14 propuestas por el despacho; artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; artículo 25 con la supresión del inciso 8º y modificaciones de los incisos 9º y 11 propuestas por el despacho; artículo 26 propuesto por el despacho; artículo 27 que es el artículo 26 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 28 que es el artículo 27 del proyecto; artículo 29 que es el artículo 28 del proyecto, con las modificaciones de los incisos 3º y 7º propuestas por el despacho; artículo 30 que es el artículo 29 del proyecto; artículo 31 que es el artículo 30 del proyecto; artículo 32 que es el artículo 31

del proyecto; artículo 33 que es el artículo 32 del proyecto; artículo 34 que es el artículo 33 del proyecto; artículo 35 que es el artículo 34 del proyecto; artículo 36 que es el artículo 35 del proyecto; artículo 37 que es el artículo 36 del proyecto; artículo 38 que es el artículo 37 del proyecto; artículo 39 que es el artículo 38 del proyecto; artículo 40 que es el artículo 39 del proyecto; artículo 41 que es el artículo 40 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 42 que es el artículo 41 del proyecto; artículo 43 que es el artículo 42 del proyecto; artículo 44 que es el artículo 43 del proyecto; artículo 45 que es el artículo 44 del proyecto; artículo 46 que es el artículo 45 del proyecto; artículo 47 que es el artículo 46 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 48, con la modificación del inciso 1º propuesta por el despacho; artículo 49 que es el artículo 47 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 50 que es el artículo 49 del proyecto; artículo 51 que es el artículo 50 del proyecto; artículo 52 que es el artículo 51 del proyecto; artículo 53 que es el artículo 52 del proyecto; artículo 54 que es el artículo 53 del proyecto; artículo 55 que es el artículo 54 del proyecto; artículo 56 que es el artículo 55 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 57 que es el artículo 56 del proyecto; artículo 58 que es el artículo 57 del proyecto; artículo 59

que es el artículo 58 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 60 que es el artículo 59 del proyecto; artículo 61 que es el artículo 60 del proyecto, con la modificación del primer párrafo propuesta por el despacho; artículo 62 que es el artículo 61 del proyecto; artículo 63 que es el artículo 62 del proyecto; artículo 64 que es el artículo 63 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 65 que es el artículo 64 del proyecto; artículo 66 que es el artículo 65 del proyecto; artículo 67 que es el artículo 66 del proyecto; artículo 68 que es el artículo 67 del proyecto; artículo 69 que es el artículo 68 del proyecto; artículo 70 propuesto por el despacho; artículo 71 propuesto por el despacho; artículo 72 que es el artículo 69 del proyecto, con la modificación propuesta por el despacho; artículo 73, que es de forma, propuesto por el despacho.

Sr. Presidente (Teisaire). — Queda aprobado el despacho de las comisiones.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

—Eran las 12 y 25.

ANGEL A. BARNETTE.
Director del Cuerpo de Taquígrafos.